

**PERIODICO****OFICIAL****DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE DURANGO****PRIMER SEMESTRE****LAS LEYES DECRETOS Y DEMAS DISPOSICIONES  
SON OBLIGATORIAS POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE  
EN ESTE PERIODICO****REGISTRO POSTAL****IMPRESOS****PERMISO No IM10-0008****AUTORIZADO POR SEPOMEX****DIRECTOR RESPONSABLE EL C. SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO DEL EDO.****S U M A R I O****PODER EJECUTIVO DEL ESTADO****SOLICITUD.-**

QUE ELEVA ANTE EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO EL C. LIC. RAUL ALDAMA RAMÍREZ, SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN REGIONAL OBRERA MEXICANA EN EL ESTADO (CROM) PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE QUINCE CONCESIONES DE TRANSPORTE MIXTO, SEIS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RODEO, TRES EN EL POBLADO ABASOLO DEL MISMO MUNICIPIO Y SEIS CONCESIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL ESTADO DE DURANGO.

**PAG. 2****CONTRATO DE  
FUSION.-**

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA PROGRESO DE VICENTE GUERRERO, S.C. DE R.L. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO LA FUSIONANTE, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR PEDRO BECERRA ECHEVERRIA Y POR OTRA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA CAJA POPULAR CHALCHIHUITES, S.C. DE R.L. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO LA FUSIONADA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR JOSE LUIS PEREZ PEREZ.

**PAG. 3****SENTENCIA.-**

EMITIDA EN EL JUICIO AGRARIO RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DE EJIDO QUE BENEFICIO EL POBLADO CARBONERAS Y ANEXOS DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO.

**PAG. 11****BENEMÉRITA Y CENTENARIA  
ESCUELA NORMAL DEL ESTADO****ACTA.-**

PROFESIONAL DE LICENCIADA EN EDUCACION PRIMARIA DE LA C. TELAM CRISTINA DEVORA HERRERA.

**PAG. 71**

## DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES

ANTE EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, C.P. ISMAEL ALFREDO HERNÁNDEZ DERAS, EL C. LIC. RAUL ALDAMA RAMÍREZ, SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN REGIONAL OBRERA MEXICANA EN EL ESTADO (CROM), PRESENTÓ SOLICITUD EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

“.....POR MEDIO DEL PRESENTE TENGO A BIEN SOLICITARLE LA AUTORIZACION PARA EL OTORGAMIENTO DE QUINCE CONCESIÓN DE TRANSPORTE MIXTO, SEIS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RODEO, TRES EN EL POBLADO ABASOLO DEL MISMO MUNICIPIO Y POR ULTIMO SEIS CONCESIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL ESTADO DE DURANGO, ESPERANDO VERNOS FAVORECIDOS, PIDO A USTED SEÑOR GOBERNADOR, QUE NUESTRA SOLICITUD SEA DEBIDAMENTE AUTORIZADA...”

LÓ QUE SE PUBLICA EN ESTE PERIÓDICO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE TRANSPORTES, CON EL OBJETO DE PERMITIR A TERCEROS QUE CONSIDEREN SE LESIONARÍAN SUS INTERESES, INTERVENGAN EN DEFENSA DE LOS MISMOS.

VICTORIA DE DURANGO, DGO., A 02 DE MAYO DE 2005

## CONTRATO DE FUSION

Contrato de fusión que celebran por una parte la Sociedad denominada PROGRESO DE VICENTE GUERRERO, S.C. de R.L. de C.V. a quien en lo sucesivo se le denominara como LA FUSIONANTE, representado en este acto por el Señor Pedro Becerra Echeverría y por otra parte la sociedad denominada CAJA POPULAR CHALCHIHUITES, S.C. de R.L. de C.V. a quien en lo sucesivo se le denominará como LA FUSIONADA, representada en este acto por el Señor José Luis Pérez Pérez, a celebrar un contrato de Fusión, de conformidad con las siguientes:

### DECLARACIONES:

- I. Declara LA FUSIONANTE por conducto de su representante, que LA FUSIONANTE es una persona moral, constituida de conformidad con las leyes mexicanas, que cuenta con la capacidad necesaria para comparecer a la celebración del presente contrato y que sus facultades no le han sido restringidas de forma alguna.
- II. Que mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha 16 DE Abril del 2005, LA FUSIONANTE acordó el llevar a cabo los trabajos tendientes a la FUSION con la FUSIONADA.
- III. Declara LA FUSIONADA por conducto de su representante, que LA FUSIONADA es una persona moral, constituida de conformidad con las leyes mexicanas, que cuenta con la capacidad necesaria para comparecer a la celebración del presente contrato y que sus facultades no le han sido restringidas de forma alguna.
- IV. Que mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha 9 de Abril del 2005, LA FUSIONADA acordó el llevar a cabo la FUSION con LA FUSIONANTE.
- V. Declaran LA FUSIONANTE y LA FUSIONADA que es deseo mutuo fusionarse en virtud de así convenir a los intereses de ambas, para lo cual se sujetan a las siguientes.

### CLAUSULAS:

#### Objeto:

**CLÁUSULA PRIMERA.-** El objeto del presente contrato es establecer los lineamientos mínimos, con los cuales se llevará a cabo el proceso de fusión entre LA FUSIONANTE y LA FUSIONADA.

#### Denominación:

**CLÁUSULA SEGUNDA.-** En virtud de la fusión, LA FUSIONADA es CAJA POPULAR CHALCHIHUITES, S.C. de R.L. de C.V. y LA FUSIONANTE es PROGRESO DE VICENTE GUERRERO, S.C. DE R.L. de C.V., por consiguiente LA FUSIONANTE seguirá llevando el nombre de PROGRESO DE VICENTE GUERRERO S.C. DE R.L. DE C.V.

**Causahabencia:**

**CLÁUSULA TERCERA.-** Por lo anterior, PROGRESO DE VICENTE GUERRERO, S.C. DE R.L. de C.V., será causahabiente de CAJA POPULAR CHALCHIHUITES, S.C. de R.L. de C.V. a título universal, en tal virtud adquiere todos los derechos y obligaciones los activos y pasivos de CAJA POPULAR CHALCHIHUITES, S.C. de R.L. de C.V.

PROGRESO DE VICENTE GUERRERO, S.C. DE R.L. de C.V., , como sociedad FUSIONANTE, reconoce todos los contratos civiles, mercantiles y de cualquier otra índole que haya celebrado mediante las facultades otorgadas en las bases constitutivas vigentes de CAJA POPULAR CHALCHIHUITES, S.C. de R.L. de C.V. por lo que PROGRESO DE VICENTE GUERRERO, S.C. DE R.L. de C.V., asumirá todos los derechos y se hará cargo de todas las obligaciones consignadas en los mismos o que hayan surgido de cualesquiera otros actos jurídicos al 30 de Abril del 2005.

**Fecha de Balances**

**CLÁUSULA CUARTA.-** Para efectos de la fusión las partes convienen en atenerse a las cifras consignadas en los balances practicados al 30 de Abril del 2005, en el caso de PROGRESO DE VICENTE GUERRERO, S.C. DE R.L. de C.V., y del 30 de Abril del 2005., en el caso de CAJA POPULAR CHALCHIHUITES, S.C. de R.L. de C.V., **con los anexos de cada una de los rubros**, que forman parte del presente convenio. Dichos balances deberán publicarse junto con el convenio de fusión.

**Consentimiento de Acreedores**

**CLÁUSULA QUINTA.-** CAJA POPULAR CHALCHIHUITES, S.C. de R.L. de C.V., **tiene** el consentimiento de sus acreedores socios así como los de PROGRESO DE VICENTE GUERRERO, S.C. DE R.L. de C.V., para efectos de la fusión y se obliga a pagar los créditos respecto a los cuales no haya obtenido consentimiento, en el momento en que surta efectos la fusión respecto a terceros.

**Fecha de efectos de la Fusión**

**CLÁUSULA SEXTA.-** En virtud de lo pactado en la cláusula precedente la fusión tendrá efectos a partir del 2 de Mayo del 2005, para lo cual se deberán hacer todos los trámites necesarios para llevar a cabo la inscripción de los acuerdos de Fusión ante los Registros Público de Comercio que les corresponda.

**Aumento de Capital Social**

**CLÁUSULA SÉPTIMA.-** Con motivo de la fusión, LA FUSIONANTE aumenta su capital social pagado en un monto que se determinara de acuerdo al número de socios que tenga la sociedad FUSIONADA al 30 de abril de 2005, multiplicado por el valor del certificado de aportación cuyo valor es de \$1,200.00.

**Certificados de Aportación**

**CLÁUSULA OCTAVA.-** Como consecuencia del aumento del capital social de LA FUSIONANTE se cancelan los CERTIFICADOS DE APORTACION de la FUSIONADA objeto de canje por nuevos CERTIFICADOS DE APORTACION que emita LA FUSIONANTE, **para sus propios socios y los que provienen de la sociedad fusionada** de acuerdo con el número de CERTIFICADOS DE APORTACION a que se refiere la cláusula precedente. -----

**Beneficios de la Fusión:**

**CLÁSULA NOVENA.-** LA FUSIONANTE y LA FUSIONADA se obligan a realizar todas las actividades y trabajos que se requieran para lograr la fusión, una vez concluidos deberán someterse a la aprobación final de la Asamblea General de Cada Sociedad, para obtener los beneficios de: Fortalecimiento y Crecimiento de la Caja que subsista mediante una mayor cobertura de mercado abarcando la mayor parte del estado de Durango y parte de Zacatecas, afrontar los costos que ocasiona el estar dentro de un marco legal, como lo es el de la ley de Ahorro y Crédito Popular, enfrentar la competencia en un Nivel de Operación superior al que actualmente ostentan, ofrecer mejores servicios de crédito y captación, como sería ampliación en Plazos, Tasas de Interés competitivas, incremento en los montos de los créditos; el aprovechamiento de las fortalezas que posee cada Caja al conjuntar esfuerzos, etc.

**Comité de trabajo de Fusión:**

**CLÁSULA DECIMA.-** Los Consejos de Administración de LA FUSIONANTE y LA FUSIONADA, designaron dos COMITÉS DE TRABAJO DE FUSION, uno por LA FUSIONANTE y otro por LA FUSIONADA, integrado por las siguientes personas:

**POR LA FUSIONANTE:**

1)	Pedro Becerra Echeverría.	Gerente
2)	Teodoro Carbajal García	Presidente C. de Administración.
3)	Antonio García Hernández	Presidente C. de Vigilancia.

**POR LA FUSIONADA:**

1)	José Luis Pérez Pérez	Gerente
2)	Enrique Pérez Zuñiga.	Vice-Presidente C. de Administración.

Las reuniones de trabajo se llevarán cabo con la representación de cuando menos 2 de la FUSIONANTE y uno de la FUSIONADA, no será necesario que se encuentren en su totalidad los COMITES DE TRABAJO DE FUSION de cada parte.

**Estructuras de Gobierno actuales:**

**CLÁUSULA DECIMO PRIMERA.-** Los miembros de cada Consejo de Administración y Vigilancia seguirán desempeñando el cargo conferido. Una vez celebrada la FUSION, se estará a lo que establece la Cláusula siguiente.

**Estructuras de Gobierno futuras:**

**CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.-** Los miembros del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia, de LA FUSIONANTE serán designados de conformidad con lo que establecen los Estatutos Sociales de LA FUSIONANTE, teniendo derecho LA FUSIONADA de designar a 2 consejeros de los 8 miembros del consejo de Administración y Vigilancia actual de LA FUSIONADA quedando los otros 6 como posibles sustitutos para las 2 plazas de consejeros otorgadas por la FUSIONANTE.

Con motivo de la fusión se otorgan y ratifican al Consejo de Administración de LA FUSIONANTE todas las facultades, poderes, funciones y representación contenidos en el estatuto social de esta Sociedad conjuntamente con los de LA FUSIONADA, así como los especiales que hayan sido concedidos al Presidente del Consejo, por lo que aquellas que correspondían a LA FUSIONADA desaparecerán y se cancelarán al surtir efectos la FUSION, por lo anterior LA FUSIONANTE absorberá la personalidad jurídica de LA FUSIONADA, transmitiéndose por tal motivo a LA FUSIONANTE todos los derechos por contratos, convenios, de carácter civil o mercantil, Títulos de crédito, Operaciones de Crédito, Bursátiles, Financieros, licencias, autorizaciones, permisos, registros, concesiones, derechos litigiosos y en general todas las relaciones patrimoniales y corporativas de LA FUSIONADA.

**Gerencia General:**

**CLÁUSULA DECIMO TERCERA.-** El Gerente General de LA FUSIONANTE, Sr. Pedro Becerra Echeverría, continuará ocupando el puesto de Gerente General de LA FUSIONANTE una vez que surta efectos la fusión.

**Estructura Organizacional:**

**CLÁUSULA DECIMO CUARTA.-** LA FUSIONANTE se hace responsable de todas las relaciones de carácter laboral por efectos de la fusión por lo que los empleados y trabajadores de LA FUSIONADA continuarán prestando sus servicios a la sociedad subsistente, la cual tendrá el carácter de patrón sustituto, para todos los efectos que haya lugar. En caso de que no sea posible que algún empleado de LA FUSIONADA siga prestando sus servicios por duplicidad de funciones. LA FUSIONADA se compromete a otorgar las indemnizaciones que le correspondan de conformidad con la Ley Federal del Trabajo.

**Sede y/o Ubicación:**

**CLÁUSULA DECIMO QUINTA.-** El domicilio social de LA FUSIONANTE queda establecido en Calle Alfredo Salinas 109 Ote., Zona Centro, en Vicente Guerrero, Durango, es el que corresponde a la oficina MATRIZ.

**Obligaciones Fiscales:**

**CLÁUSULA DECIMO SEXTA.-** LA FUSIONANTE será la responsable de todas las obligaciones fiscales que correspondan a LA FUSIONADA a partir de que se inicie la fusión, presentando los avisos cierre de operaciones, declaraciones pendientes al 30 de abril del 2005 y demás documentación que conforme a las leyes fiscales correspondan.

**Publicación:**

**CLÁUSULA DECIMO SEPTIMA.-** En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 223 y relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los respectivos acuerdos sobre la fusión y las bases para la misma, así como los balances de las sociedades que se fusionan deberán ser publicados en el Periódico Oficial del estado de Durango y Zacatecas, e inscritos dichos acuerdos en el Registro Público de Comercio de las Ciudades respectivas.

**Cese de operaciones:**

**CLÁUSULA DECIMO OCTAVA.-** CAJA POPULAR CHALCHIHUITES, S.C. de R.L. de C.V cesará sus actividades precisamente al cierre de las operaciones el 30 de Abril del 2005, fecha en la cual, conforme al artículo 11 del Código Fiscal de la Federación, terminará su ejercicio fiscal, debiendo presentar LA FUSIONANTE las declaraciones y avisos que le hubiere correspondido a LA FUSIONADA, conforme a lo dispuesto por el mismo Código Fiscal de la Federación.

**Objeto de los trabajos:**

**CLÁUSULA DECIMA NOVENA.-** Los trabajos de fusión, sobre los cuales trabajarán el Comité de trabajo de fusión serán todos aquellos que tengan que ver, entre otros, con: fecha en que surtirá efectos, fecha de información financiera, responsabilidades civiles, fiscales, laborales, designación y ratificación de apoderados, otorgamiento de nuevos poderes, publicación de acuerdos de fusión en el Registro Publico de Comercio y en Periódico Oficial, etc.

**Plazo para los trabajos:**

**CLÁUSULA VIGESIMA.-** El Plazo para realizar los trabajos de fusión por los integrantes del Comité de trabajo de fusión termina el 20 de Mayo del 2005.

**Domicilios convencionales**

**CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA.-** Las partes señalan como domicilios convencionales:

LA FUSIONANTE en Alfredo Salinas 109 Ote. Vicente Guerrero, Dgo.

LA FUSIONADA en Moctezuma 213 Chalchihuites, Zac.

**Jurisdicción**

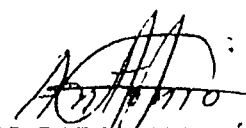
**CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA.-** Estos puntos resolutivos del acuerdo de fusión quedan sujetos a la Ley General de Sociedades Mercantiles y como supletorio de la misma, al Código Civil Federal, sometiéndose las partes, en caso de controversia, a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad DURANGO, DGO. , renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles por razón de algún cambio de domicilio presente o futuro.

Este contrato se firma por duplicado en la Ciudad de Vicente Guerrero, Dgo., el 18 de Abril del 2005.



TEODORO CARVAJAL GARCIA  
PRESIDENTE DEL C. DE ADMÓN.


LA FUSIONANTE



ANTONIO GARCIA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTE DEL C. DE VIGILANCIA



PEDRO BECERRA ECHEVERRIA  
GERENTE GENERAL



JULIO A. LAZALDE LOPEZ  
PRESIDENTE DEL C. DE ADMÓN.

LA FUSIONADA



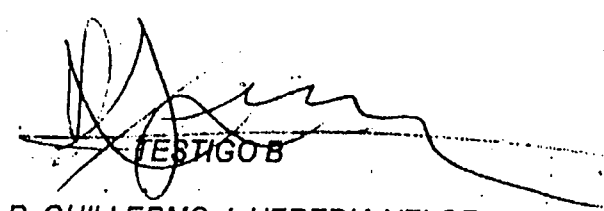
ANTONIO MARQUEZ ESPARZA  
PRESIDENTE DEL C. DE VIGILANCIA



JOSE LUIS PEREZ PEREZ  
GERENTE GENERAL  
TESTIGOS



TESTIGO A  
HECTOR VAZQUEZ TINOCO  
GERENTE DE CAJA HIPODROMO



TESTIGO B  
C.P. GUILLERMO J. HEREDIA VELOZ

Registrada bajo el Número 112 de Fojas 112 de libro Número 3 Segundo Auxillar de Comercio Tomo No. 6 Sociedades y Poderes del Registro Público de Comercio de este Distrito, a las 13 Horas del día de hoy; Queda una copia agregada al Archivo Especial de esta Oficina y forma las fojas Números 1-16 Nombre de Dios, Dgo. 13 de Mayo del 2005.



**PROGRESO DE VICENTE GUERRERO, S.C. DE R.L. DE C. V.**  
**SOCIEDAD FUSIONANTE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2005**

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAJA Y BANCOS	5,685,059	CAPTACION DE RECURSOS DE SOCIOS	105,751,549
INVERSIONES TEMPORALES	26,980,910	ACREEDORES DIVERSOS	1,227,640
	<u>32,665,969</u>	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>106,979,189</u>
PRESTAMOS A SOCIOS	87,337,555	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	<u>2,078,215</u>
CARTERA VENCIDA	13,286,453		
DEUDORES DIVERSOS	959,531		
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	14,250,440	TOTAL PASIVO	<u>109,057,404</u>
	<u>87,333,099</u>		
BIENES ADJUDICADOS	<u>144,550</u>		
PAGOS ANTICIPADOS	79,423	CAPITAL CONTABLE	
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	<u>79,423</u>	CAPITAL PAGADO	9,804,000
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	<u>120,223,041</u>	PARTES SOCIALES INCOMPLETAS	80,456
			<u>9,884,456</u>
ACTIVO FIJO		UTILIDADES RETENIDAS	
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,822,074	RESERVAS DE CAPITAL	<u>1,737,619</u>
SUMA EL ACTIVO FIJO	<u>2,822,074</u>	RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>2,365,636</u>
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>13,987,711</u>
SUMA EL ACTIVO TOTAL	<u>123,045,115</u>	SUMA PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE	<u>123,045,115</u>

EL PRESENTE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE PROGRESO DE VICENTE GUERRERO, S. C. DE R. L. DE C. V., EN SU CARACTER DE SOCIEDAD FUSIONANTE, CON CIFRAS AL 30 DE ABRIL DE 2005, SE EMITE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES EN SU ARTICULO 223 Y CUMPLIMENTAR EL ACUERDO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FUSION CELEBRADO CON CAJA POPULAR CHALCHIHUITES, S. C. DE R. L. DE C. V., EN SU CARACTER DE SOCIEDAD FUSIONADA.

**PEDRO BECERRA ECHEVARRIA**

COORDINADOR DE LA FUSION POR PARTE DE LA SOCIEDAD FUSIONANTE

**CAJA POPULAR CHALCHIHUITES, S.C. DE R.L. DE C. V.**  
**SOCIEDAD FUSIONADA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2006**

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAJA Y BANCOS	598,002	CAPTACION DE RECURSOS DE SOCIOS	19,899,628
INVERSIONES TEMPORALES	8,365,713	ACREEDORES DIVERSOS	100,196
	<u>8,963,715</u>		
PRESTAMOS A SOCIOS	9,038,122	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>19,999,824</u>
DEUDORES DIVERSOS	124,127		
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	555,829	TOTAL PASIVO	<u>19,999,824</u>
	<u>8,808,420</u>		
BIENES ADJUDICADOS	<u>300,000</u>		
PAGOS ANTICIPADOS			
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	82,584	CAPITAL CONTABLE	
	<u>82,584</u>	CAPITAL PAGADO	2,078,400
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	<u>17,982,729</u>	PARTES SOCIALES INCOMPLETAS	41,861
			<u>2,120,261</u>
ACTIVO FIJO		UTILIDADES RETENIDAS	
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	3,850,120	RESERVAS DE CAPITAL	84,719
SUMA EL ACTIVO FIJO	<u>3,850,120</u>	RESULTADOS DEL EJERCICIO	411,955
			<u>1,803,025</u>
SUMA EL ACTIVO TOTAL	<u>21,802,849</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	
		SUMA PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE	<u>21,802,849</u>

EL PRESENTE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE CAJA POPULAR CHALCHIHUITES, S. C. DE R. L. DE C. V., EN SU CARACTER DE SOCIEDAD FUSIONADA, CON CIFRAS AL 30 DE ABRIL DE 2006, SE EMITE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES EN SU ARTICULO 223Y CUMPLIMENTAR EL ACUERDO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FUSION CELEBRADO CON PROGRESO DE VICENTE GUERRERO, S. C. DE R. L. DE C. V., EN SU CARACTER DE SOCIEDAD FUSIONANTE.

  
**JOSE LUIS PEREZ PEREZ**

COORDINADOR DE LA FUSION POR PARTE DE LA SOCIEDAD FUSIONADA

JUICIO AGRARIO No.182/93  
POBLADO : "CARBONERAS Y ANEXOS"  
MUNICIPIO : SAN DIMAS  
ESTADO : DURANGO  
ACCIÓN : AMPLIACIÓN DE EJIDO.

MAGISTRADO PONENTE: LIC. RODOLFO VELOZ BAÑUELOS.  
SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA: LIC. MARIA ANTONIETA VILLEGAS LOPEZ.

México, Distrito Federal, a nueve de enero de mil novecientos noventa y seis.

VISTO para resolver el juicio agrario número 182/93 que corresponde al expediente número 2477, relativo a la solicitud de ampliación de ejido promovida por un grupo de campesinos del poblado denominado "Carboneras y Anexos", Municipio de San Dimas, Estado de Durango, y para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el tomo D.A. 2074/94 por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito promovido por Pedro Nolasco Madriles Reyes, Crescencio Martínez Juárez y Antonio Corral Reyes, integrantes del Comité Participativo Ejecutivo Agrario de la ampliación citada, contra autos de este Tribunal.

RESULTANDO:

PRIMERO. Por Resolución Presidencial de veintisiete de julio de mil novecientos sesenta y tres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de agosto del mismo año, se concedió, por concepto de dotación de tierras, a 33 (treinta y tres) campesinos capacitados una superficie de 3,000-00-00 (tres mil) hectáreas de agostadero cerril y monte alto, que les fueron entregadas mediante ejecución del doce de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro, verificándose el deslinde respectivo el dieciocho de junio del mismo año.

SEGUNDO. Por escrito de diecisiete de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro, un grupo de campesinos del poblado de que se trata, solicitó al Gobernador del Estado ampliación de ejido, señalando como de probable afectación el fraccionamiento "San Dimas, Carboneras, Puenteillas y sus Demasías", y el predio denominado "San Agustín", ubicados en el mismo Municipio y Estado, propiedad de la

## JUICIO AGRARIO No. 182/93

compañía "Maderera Industrial de San Dimas", Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Por oficios números 5781, 5782, 5783 de dos de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro, el Gobernador del Estado de Durango expidió nombramientos a José Saucedo Moreno, Javier Alvarado Maldonado y Jesús Aguilar, como Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente, del Comité Particular Ejecutivo.

TERCERO. La Comisión Agraria Mixta instauró el expediente el veinte de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro, bajo el número 2477. Mediante oficio número 314 de la misma fecha, el referido órgano Colegiado notificó dicha instauración a la compañía "Maderera Industrial de San Dimas", Sociedad de Responsabilidad Limitada, así como a los propietarios y encargados de los predios ubicados dentro del radio de siete kilómetros del núcleo gestor. La publicación de la solicitud se realizó el nueve de abril del mismo año en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, número 29, tomo CXXX.

Por oficio número 423 de veintidós de abril de mil novecientos sesenta y cuatro se comisionó a Jesús Medina Ordaz para que practicara los trabajos censales que se referían a la fracción I del artículo 232 del Código Agrario de 1942, correlativa de la fracción I del artículo 286 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Mediante oficio número 745 de cinco de junio de mil novecientos sesenta y cinco, la Comisión Agraria Mixta en el Estado ordenó a Salvador Guerrero Meza, que practicara los trabajos técnicos informativos.

CUARTO. El veintinueve de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro, el comisionado Jesús Medina Ordaz informó que el censo practicado arrojó sesenta y un campesinos capacitados.

Asimismo, del propio informe se advierte que el comisionado practicó una inspección ocular en los terrenos de la dotación, comprobando que los mismos se encontraban totalmente explotados y que dentro del radio legal del núcleo promovente se ubicaban los terrenos propiedad de la

## JUICIO AGRARIO No. 182/93

compañía "Maderera Industrial de San Dimas", Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Mediante escrito de siete de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro, dirigido al Presidente de la Comisión Agraria Mixta, el licenciado Víctor Manuel Cano compareció a este procedimiento, en su carácter de apoderado legal de Esmeralda Ibarra Sáenz, María del Socorro Ibarra, Bartolo Bueno Robles, Raúl García del Avellano, Jaime Enrique Hinojos Castillo, Manuel Hinojos Rodríguez, Carlos Solís Colmeneros y Eduardo Muñoz Cigarroa, presentando pruebas y formulando alegatos en favor de sus representados, los que, en síntesis, hizo consistir en lo siguiente: que sus poderdantes eran propietarios de los ocho lotes en que se fraccionó el predio denominado "San Dimas, Carboneras, Puñtecillas y sus Demasías"; que cada uno contaba con una superficie de 800-00-00 (ochocientas) hectáreas de acuerdo con la autorización expedida por la Dirección de Fraccionamientos y Terrenos Baldíos del entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, según oficio número XVII-300093 de diecisiete de febrero de mil novecientos sesenta y uno. Acompañó a su escrito copias certificadas de las escrituras de adjudicación de los mencionados lotes, así como una fotostática del oficio que autorizó la constitución del fraccionamiento, documentación que corre agregada a los autos a fojas 62 a 177 del legajo I.

Por escrito de veintidós de junio de mil novecientos sesenta y cinco, el comisionado Salvador Guerrero Meza informó, respecto de los trabajos técnicos que practicó, lo siguiente:

"...Habiendo girado las notificaciones a los propietarios de predios que se encuentran dentro del Fraccionamiento para que personalmente o por medio de un Representante debidamente acreditado asistiera a la identificación de linderos y brechas así como el debido amojonamiento que limite las distintas propiedades que se encuentran dentro de este predio. Igualmente se giró la Convocatoria respectiva al Comité Ejecutivo Agrario del poblado y vecinos del poblado, conocedores de los terrenos.

Acompañado por varios vecinos del poblado solicitante y Miembros del Comité Ejecutivo Agrario del poblado que señalan como presunto afectables, iniciándose esta inspección en la mojonera denominada 'San Miguelito' y que esta (sic) ubicada en el cerro 'San Miguel', de este punto nos trasladamos (sic) a la siguiente mojonera 'Sin Nombre' y que limita el Lote Número 4, que es propiedad del señor Manuel Hinojos R., de éste poblado nos trasladamos al cerro del 'Calichal', en donde se encuentra una mojonera que lleva el mismo nombre y que limita los Lotes Número 4G., Lote número 9C y Lote Número 2 D., siendo éstos dos últimos propiedad de los señores Alejandro Pérez Pérez, y Olga Pérez González y que se encuentra dentro del fraccionamiento 'California', de éste punto nos trasladamos a otro punto que también se denomina 'El Calichal', por estar enclavadas las mojoneras en el mismo cerro, de éste punto como a cincuenta metros se encuentra una mojonera y que limita el Lote Número 3G y que es propiedad del señor Eduardo Muñoz C., de éste punto nos trasladamos a la mojonera que los campesinos denominaron 'Piedra Blanca' y que limita los lotes números 3G, 4G y 5 G, siendo éste último propiedad del señor Raúl García Avellano, de éste punto nos trasladamos a la mojonera 'Sin Nombre', de éste punto a la mojonera que lleva el nombre de 'Alto de los Otates' y que limita los lotes 7G, propiedad del Señor Bartolo Bueno R. y Lote número 8G, propiedad del Señor Carlos Solís C., estando afectados éstos últimos lotes por la dotación ejidal del poblado de 'CARBONERAS Y ANEXOS', igualmente por éstos lotes pasa la brecha o línea de transmisión que da fuerza motriz al mineral de 'Tayoltita' y que atraviesa el fraccionamiento denominado 'SAN DIMAS, CARBONERAS, PUENTECILLAS Y DEMACÍAS (sic)', ubicado en el Municipio de San Dimas, Estado de Durango.".

QUINTO. La Comisión Agraria Mixta emitió su dictamen el tres de mayo de mil novecientos sesenta y seis, y por considerar que para dejar totalmente cubiertas las necesidades de usos colectivos del poblado de que se trata, le resultaba un faltante de 3,080-00-00 (tres mil ochenta)

## JUICIO AGRARIO No. 182/93

hectáreas de terrenos de agostadero, resolvió ampliar el mencionado ejido con dicha superficie que se tomaría del predio denominado "Santa Ana", propiedad de la compañía "Maderera Industrial de San Dimas", Sociedad de Responsabilidad Limitada

SEXTO. El Gobernador del Estado dictó su Mandamiento el tres de agosto de mil novecientos sesenta y seis, aprobando en todas sus partes el dictamen de la Comisión Agraria Mixta, el cual se publicó el cuatro de septiembre del mismo año, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, como CXXXV, número 19.

Mediante oficio número 858 de seis de agosto de mil novecientos setenta, la Comisión Agraria Mixta en el Estado ordenó al técnico Pedro Cano Herrera que ejecutara el referido mandamiento gubernamental, quien el veintuno de octubre del mismo año informó que de la superficie de 3,080-00-00 (tres mil ochenta) hectáreas que concedió dicho mandamiento, solo entregó 1,096-00-00 (mil noventa y seis) hectáreas en posesión provisional a los campesinos peticionarios, según acta de posesión y deslinde de veintinueve de agosto de mil novecientos setenta, en virtud de que la superficie restante había sido entregada con anterioridad al poblado denominado "Potrero o Rincón de las Calabazas", del Municipio de San Ignacio, Estado de Sonora.

SEPTIMO. El veinticinco de febrero de mil novecientos setenta y uno, el Delegado Agrario en el Estado de Durango elaboró el resumen del caso y emitió su opinión en el sentido de que se modificara el mandamiento gubernamental en lo que se refiere a la superficie concedida y se otorgara al poblado de que trata únicamente las 1,096-00-00 (mil noventa y seis) hectáreas entregadas en posesión provisional.

OCTAVO. El doce de enero de mil novecientos setenta y tres, el Cuerpo Consultivo Agrario aprobó acuerdo en el que ordenó una investigación para determinar si en términos del artículo 210, fracción III, incisos a) y b) de la Ley Federal de Reforma Agraria, fue simulado el fraccionamiento del predio denominado "San Dimas, Carboneras, Puenteclillas y sus Demasías", propiedad de la compañía "Maderera Industrial de San Dimas", Sociedad de Responsabilidad Limitada.

En cumplimiento del acuerdo antes citado, mediante oficio número 144 de fecha de junio de mil novecientos setenta y tres, el Delegado Apellido en el Estado de Durango comisionó al Ingeniero Rufino Acosta Aldrete, quien mediante escrito sin fecha, visible a fojas 27 a la 31 del legajo VIII de los autos, informó que el predio "San Dimas, Carboneras, Puenteceillas y las Demasías" originalmente contó con una superficie registral de 11,142-05-00 (once mil ciento cuarenta y dos hectáreas, cinco áreas), según certificación expedida el nueve de octubre de mil novecientos setenta y tres, por el oficial encargado del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Tayoltita, Cabecera del Municipio de San Dimas, Estado de Durango; que pertenecía a la "Mexican Candelaria Company", Sociedad Anónima, que posteriormente, dicha compañía aportó el inmueble de referencia para constituir la empresa "Maderera Industrial de San Dimas", Sociedad de Responsabilidad Limitada, cuyo traslado de dominio se inscribió en el Registro Público de la Propiedad antes mencionado, el once de septiembre de mil novecientos cincuenta y dos, que dicho predio fue afectado por dos Resoluciones Presidenciales dictadas el veintisiete de julio de mil novecientos sesenta y tres, que concedieron, por concepto de donación de tierras, al propio poblado de "Carboneras y Anexos", 3,000-00-00 (tres mil) hectáreas, y al de "Puenteceillas", 1,027-00-00 (mil veintisiete) hectáreas, ambos pertenecientes al Municipio de San Dimas, Estado de Durango; que el dieciocho de marzo de mil novecientos sesenta y tres, Robert C. Morell, en representación de la compañía "Maderera Industrial de San Dimas", Sociedad de Responsabilidad Limitada, vendió siete lotes de 800-00-00 (ochocientas) hectáreas cada uno, en favor de las siguientes personas: María del Socorro Ibarra, el lote 2-G; Eduardo Muñoz Cigarroa, el Lote 3-G; Manuel Hinojos Rodríguez, el lote 4-G; Raúl García del Avellano, el lote 5-G; Jaime Hinojos Castillo, el lote 6-G; Bartolo Bueno Robles, el lote 7-G; y Carlos Solís Colmeneros, el lote 8-G; inscribiéndose los correspondientes traslados de dominio el veintitrés de marzo del mismo año, en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Tayoltita del Municipio de San Dimas, Estado de Durango, cuyos compradores eran los mismos que se ostentaban como propietarios al momento de la inspección.



Que el comisionado pudo constatar que existían mojoneras en la parte en que dicho fraccionamiento colinda con el ejido "Carboneras y Anexos", y que en el resto del terreno no localizó ninguna mojonera, brecha o cerco que dividiera entre sí los lotes del fraccionamiento; que los terrenos inspeccionados eran de forestal maderable, cuya explotación corría a cargo de la compañía "Triplay y Maderas de Durango", Sociedad de Responsabilidad Limitada

NOVENO. En sesión de catorce de febrero de mil novecientos setenta y ocho, el Cuerpo Consultivo Agrario acordó que era procedente que la Delegación Agraria en el Estado de Durango, en coordinación con la Dirección General para la Investigación Agraria comisionara personal que practicara trabajos técnicos informativos complementarios, a fin de evaluar conforme a derecho, si el fraccionamiento "San Dimas, Carboneras, Puenteçillas y sus Demasías" se encontraba dentro de la hipótesis a que se refiere el artículo 210, fracción III, incisos a) y b) de la Ley Federal de Reforma Agraria.

En cumplimiento de lo anterior, por oficios números 5934 y 5959, de veintiocho y veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, respectivamente, la entonces Dirección General para la Investigación Agraria comisionó al topógrafo Mario Quiñones Benítez, a fin de que procediera a llevar a cabo una investigación del fraccionamiento del predio "San Dimas, Carboneras, Puenteçillas y sus Demasías". Dicho comisionado rindió su informe por escrito de quince de enero de mil novecientos setenta y nueve, del que se conoce que únicamente inspeccionó los lotes 4-G, 5-G, 6-G, 7-G y 8-G, cuya vegetación dijo era de monte alto y que estaban dedicados a la explotación forestal a cargo de la compañía "Triplay y Maderas de Durango", Sociedad de Responsabilidad Limitada, según diversos contratos de explotación forestal y compraventa de productos forestales celebrados entre la referida compañía y los propietarios de los lotes: Manuel Hinojos Rodríguez, Raúl García del Avellano, Jaime Hinojos Castillo, Bartolo Bueno Robles y Carlos Solís Colmeneros, de veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de junio de mil novecientos setenta y cinco.

Asimismo, informó que en todos los lotes trabajaba el señor Jesus Valle Ruiz y que el licenciado Victor Cano Cooley era el apoderado de todos los propietarios.

Obra en el expediente, a fojas 119 del legajo VI, certificación expedida el cuatro diciembre de mil novecientos setenta y ocho, por el Registro Público de la Propiedad de Tayoltita, en la que se asienta que en el libro 5, tomo VII de Sociedades y Poderes, a fojas 180 a 188 frente, se encuentra la inscripción número 26 del cinco de septiembre de mil novecientos sesenta y dos, en la que se menciona que comparecieron Laurence F. Morell, en representación de "San Luis Mining Co.", Marino S. Córdoba, en representación de "Explotadora Minera", Sociedad Anónima, y por su propio derecho Luis Guzmán Carreón, José Jesús Pérez y Manuel Hinojos Rodríguez para constituir la Sociedad de Responsabilidad Limitada denominada "Maderera Duranguense".

El comisionado Mario Alberto Quiñones Benítez acompañó a su informe, entre otros documentos, copia de los contratos antes citados, cinco constancias de once de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, extendidas por José de Busk Catón, Gerente Administrativo de Triplay y Maderas de Durango, Sociedad de Responsabilidad Limitada, en las que manifestó que los propietarios Manuel Hinojos, Raúl García del Avellano, Jaime Hinojos Castañeda, Bartolo Bueno Robles y Carlos Solís Colmeneros, tenían celebrados con dicha empresa contratos de explotación forestal respecto de sus lotes, los que estaban en vigor ya que anualmente se renovaban y las liquidaciones se les hacían en su oportunidad de acuerdo a los volúmenes explotados.

Por otra parte, corre agregado al expediente a fojas 32 del legajo VI, copia del oficio número 1995 de dieciocho de julio de mil novecientos setenta y nueve, dirigido al entonces Subsecretario Forestal y de la Fauna de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, por el Director General de Información y Sistemas Forestales, dependiente de dicha Subsecretaría, en el que se señala que los propietarios de los lotes derivados del fraccionamiento del predio "San Dimas, Carbóneras, Puenteillas y sus Demasías" constituyeron un usufructo en favor de la compañía "Maderera Duranguense", Sociedad de Responsabilidad

## JUICIO AGRARIO No. 182/93

Limitada, el veintiocho de marzo de mil novecientos sesenta y tres, con vigencia de veinte años a partir de tal fecha, prorrogable por nueve años once meses más, inscritos todos en el Registro Público Nacional Forestal en el libro I, tomo III, volumen I sección 4, el once de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco; que posteriormente, esta compañía celebró un contrato de cesión de derechos de usufructo sobre los lotes mencionados a favor de "Triplay y Maderas de Durango", Sociedad de Responsabilidad Limitada, con vigencia de diez años a partir del veintiséis de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro, inscrito bajo el número 196, folio 66, libro I, tomo III, volumen I, sección 4, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco, en la citada oficina. Las dos escrituras antes señaladas aparecen a fojas 34 a la 74 del legajo VI de los autos.

Mediante oficio número 352 de quince de enero de mil novecientos setenta y nueve, el Delegado Agrario en el Estado de Durango ordenó a José Luis Puanes Ramírez, que practicara trabajos técnicos e informativos complementarios, quien informó, el veintinueve de abril del mismo año, que el predio en cuestión fue propiedad de la Sociedad Anónima "Mexican Candelaria Company", Sociedad Anónima creada mediante acta constitutiva de veintiocho de marzo de mil novecientos once, inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Tayoltita, Cabecera del Municipio de San Dimas, Estado de Durango, con el número 24 a fojas 68 a la 85, libro tres, tomo primero de sociedades y poderes, el seis de abril del mismo año; que el veintiocho de marzo de mil novecientos cincuenta y dos, dicha sociedad aportó, entre otros bienes, la totalidad de la superficie del predio "San Dimas, Carboneras, Puenteceillas y sus Demasías", como pago del 50% (cincuenta por ciento) del valor de su haber social, para constituir una nueva Sociedad Mercantil que se denominó compañía "Maderera Industrial de San Dimas", Sociedad de Responsabilidad Limitada, según acta constitutiva que fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad antes mencionado bajo el número 45, a fojas de la 145 frente a la 148 frente, libro I tomo XV de la Propiedad el diez de septiembre de mil novecientos cincuenta y dos.

## JUICIO AGRARIO No. 182/93

que en su origen, el predio de referencia contó con una superficie registrada de 11,147-00-00 (once mil ciento cuarenta y dos hectáreas, cinco áreas) pero que, por Resoluciones Presidenciales de veintisiete de julio de mil novecientos sesenta y tres, se concedió dotación de tierras a los poblados "Californias y Anexos" y "Puentecillas", ambos pertenecientes al Municipio de San Dimas, Estado de Durango, afectando del citado predio 3,000-00-00 (tres mil) hectáreas y 1,027-10-00 mil veintisiete hectáreas, diez áreas) respectivamente, que la compañía "Maderera Industrial de San Dimas", Sociedad de Responsabilidad Limitada, segregó de la superficie restante siete lotes denominados 2-G, 3-G, 4-G, 5-G, 6-G, 7-G y 8-G, de 800-00-00 (ochocientos) hectáreas cada uno, según datos registrales, pero que de acuerdo con los datos proporcionados por los propietarios, los lotes 7-G y 8-G, quedaron reducidos a 420-00-00 (cuatrocientas veinte) y 176-00-00 (ciento setenta y seis) hectáreas respectivamente, en razón de que el resto de sus superficies se afectaron al ejecutarse las Resoluciones Presidenciales citadas.

Igualmente informó que los lotes del 2-G al 8-G, fraccionamiento del predio "San Dimas", pertenecientes a Puentecillas y sus Anexos fueron inscritos en el Registro Público del Distrito Judicial de Tlayoltita, Cabecera del Municipio de San Dimas, Estado de Durango, bajo los números 198 al 204 del libro I, tomo XX, a fojas 123 y 126 frente, el veintitrés de marzo de mil novecientos sesenta y tres, y que se encontraban en trámite diversas solicitudes para la expedición de certificados de inafectabilidad agrícola para cada uno de los predios, que para tal efecto fueron denominados "El Embudo", "Piedra Bola", "La Centella", "Los Mimbres", "San Miguel", "Sauces" y "La Majada", respectivamente.

Finalmente informó que la vegetación de los lotes mencionados era espontánea, consistente en encino, pino, madroño y manzanilla, encontrándose los terrenos en recuperación forestal, y que en relación al señalamiento físico, no existían brechas, cercos y mojoneras que dividieran los lotes entre sí, a excepción de las mojoneras que se encontraron en la parte colindante con la ampliación de ejido del poblado "Puentecillas", así como con el ejido definitivo "California", Municipio de San Ignacio, Sinaloa.

Por otra parte, el comisionado manifestó que al constituirse la Sociedad denominada "Maderera Industrial de San Dimas", de Responsabilidad Limitada, la Mexican Candelarian Company, Sociedad Anónima aportó, entre otros inmuebles, el predio denominado "Santa Ana", con superficie de 2,500-00-00 (dos mil quinientas) hectáreas, según se desprendía del acta constitutiva inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Tayoltita, Durango, bajo el número 45, tomo XV, libro uno, a fojas de la 145 frente a la 148 frente, el diez de septiembre de mil novecientos cincuenta y dos.

DÉCIMO. El catorce de abril de mil novecientos ochenta, la Dirección General de Procedimientos Agrarios emitió opinión en el sentido de que en virtud de que los propietarios de los lotes 4-G, 5-G, 6-G, 7-G y 8-G, del predio denominado "San Dimas, Carboneras, Puenteillas y sus Demasías", celebraron contratos de usufructo del arbolado maderable existente en sus terrenos, los cuales estaban debidamente inscritos en el Registro Público Nacional de la Propiedad Forestal, era de considerarse que no se configuraban las presunciones de simulación contempladas en el artículo 210, fracción III de la Ley Federal Agraria.

DÉCIMO PRIMERO. En sesión celebrada el primero de abril de mil novecientos ochenta y uno, el Cuerpo Agrario acordó en el que ordenó iniciar el procedimiento de nulidad de fraccionamientos de propiedades afectables en contra de María del Socorro Ibarra, Eduardo Muñoz Cigarroa, Manuel Hinojos Rodríguez, Raúl García del Avellano, Jaime Hinojos Castillo, Bartolo Bueno Robles y Carlos Solís Colmeneros, propietarios de los lotes del "Fraccionamiento San Dimas, Carboneras, Puenteillas y sus Demasías", ubicado en el Municipio de San Dimas, Estado de Durango, denominados 2-G, 3-G, 4-G, 5-G, 6-G, 7-G y 8-G, con superficies de 800-00-00 (ochocientas) hectáreas cada uno de los cinco primeros y 420-00-00 (cuatrocientas veinte) hectáreas y 176-00-00 (ciento setenta y seis) hectáreas, los dos últimos.

En cumplimiento al acuerdo descrito anteriormente, el siete de octubre de mil novecientos ochenta y uno, el

## JUICIO AGRARIO No. 182/93

Subsecretario de Asuntos Agrarios aprobó acuerdo de iniciación del referido procedimiento de nulidad de fraccionamientos de propiedades afectables por actos de simulación.

Dicho acuerdo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, y en el Periódico Oficial del Estado de Durango, el veintisiete de diciembre del mismo año.

La instauración del procedimiento de que se trata se notificó, el cinco de marzo de mil novecientos ochenta y dos, a la Compañía "Triplay y Maderas de Durango", Sociedad de Responsabilidad Limitada y el día ocho del mismo mes y año a María del Socorro Ibarra, Eduardo Muñoz Cigarroa, Manuel Hinojos Rodríguez, Raúl García del Avellano, Jaime Hinojos Castillo, Bartolo Muñoz Robles y Carlos Solís Colmeneros, para el efecto de que expusieran lo que a su derecho conviniera y rindieran las pruebas y alegatos que consideraran pertinentes.

El licenciado Juan Bravo Cuevas, apoderado de la empresa "Triplay y Maderas de Durango", Sociedad de Responsabilidad Limitada, compareció al procedimiento mediante escrito de comparecencia, a fin de mil novecientos ochenta y dos, en el que alegó, entre otras cosas, que su representada liquidaba, a cada uno de los propietarios de los lotes del 2-G al 8-G, el arbolado extraído por dicha empresa, lo que probaba con nueve copias certificadas de los recibos extendidos por su representada, por concepto de pago a Jaime Hinojos Castillo (cuatro), Manuel Hinojos Rodríguez (dos), Eduardo Muñoz Cigarroa (dos), y Raúl García del Avellano (uno), por el arbolado extraído en los lotes del fraccionamiento de "San Dimas, Carboneras, Puente de Cillas y sus Demasías", los documentos antes descritos aparecen a fojas 80 a la 88 del legajo III de los autos. Asimismo, ofreció como prueba una constancia de veinticinco de marzo de mil novecientos ochenta y dos, expedida por el ingeniero Guillermo Alvarado González, Director Técnico de la Unidad Industrial de Explotación Forestal "Triplay y Maderas de Durango" de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en la Ciudad de Durango, Durango, en la que se señala que los lotes 2-G al 8-G, del fraccionamiento "San Dimas, Carboneras, Puente de Cillas y sus Demasías" estaban en

## JUICIO AGRARIO No. 182/93

explotación forestal desde mil novecientos cincuenta y cinco, por la empresa "Triplay y Maderas de Durango", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, que actualmente los aprovechamientos en los mencionados predios se encontraban en su décima sexta anualidad de acuerdo con la información vertida en el oficio número 104-3214 de seis de marzo de mil novecientos ochenta y uno, proporcionada por el Subsecretario Forestal y de la Fauna.

Por otra parte, el licenciado Víctor Manuel Cano Cooley, en su carácter de apoderado de los propietarios de los lotes 2-G al 8-G, compareció a este procedimiento mediante escrito de diecinueve de abril de mil novecientos ochenta y dos, recibido en la propia fecha en la entonces Dirección General de Procuración, Quejas e Investigación Agraria, Sub-Dirección de Investigación Agraria, alegando que era improcedente el juicio de nulidad de fraccionamiento, instaurado por la Dirección General de Procuración, Quejas e Investigación Agraria, respecto de los lotes del predio "San Dimas, Carboneras, Puenteceillas y sus Demasías", en razón de que existían suficientes elementos en el expediente para determinar que no se configuraban las hipótesis jurídicas que se refería el artículo 210, fracción III incisos a) y b) de la Ley Federal de Reforma Agraria, y porque además, habían sido expedidos por el Ejecutivo Federal diversos acuerdos de inafectabilidad que protegían a dichos lotes.

Asimismo, apoyó sus alegatos con diversas pruebas documentales que adjuntó a su escrito y que obran a fojas 149 a 293 del legajo III de los autos, consistentes en copias certificadas de las escrituras de propiedad de cada uno de los predios en cuestión; fotostáticas de los planos de los inmuebles; fotostáticas del oficio número XVIII.700093 de diecisiete de febrero de mil novecientos sesenta y uno, en virtud del cual la Dirección de Fraccionamientos y Terrenos Baldíos dependiente del entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización autorizó el fraccionamiento del predio "San Dimas, Carboneras, Puenteceillas y sus Demasías" en 8 lotes de 800-00-00 (ochocientas) hectáreas cada uno; fotostáticas de los Diarios Oficiales de la Federación de primero de julio de mil novecientos sesenta y ocho, siete de marzo y veintitrés de agosto de mil novecientos sesenta y nueve y de

JUICIO AGRARIO No. 182/93

veinticinco de enero de mil novecientos setenta, en los que aparecieron publicadas los acuerdos de inafectabilidad agrícola de los predios "Llanos", "La Majada", "Los Mimbres", "Piedra Blanca", "San Miguel", "El Embudo" y "La Centella"; fotostática del informe rendido por el ingeniero Rufino Proesa Monsiváis, suscrito a la Comisión Agraria Mixta, el diez de enero de mil novecientos setenta y siete, en el que el profesional manifestó que los lotes en cuestión se encontraban con seguridad de concreto que delimitaban con claridad cada lote; constancia de inspección ocular practicada al fraccionamiento de mérito el diecinueve de junio de mil novecientos setenta y seis; fotostática de los contratos de explotación forestal y compra venta de productos forestales, celebrados por los propietarios y la empresa "Triplay y Maderas de Durango", Sociedad de Responsabilidad Limitada de dos de enero de mil novecientos ochenta y uno, respecto de los lotes 2-G al 8-G del multicitado fraccionamiento; constancia de veinticinco de marzo de mil novecientos ochenta y dos, extendida por "Triplay y Maderas de Durango", Sociedad de Responsabilidad Limitada, en la que se hace patente que los lotes habían venido perteneciendo al territorio de la Unidad Industrial de Explotación Forestal de "Triplay y Maderas de Durango", Sociedad de Responsabilidad Limitada, que los explotaba al amparo del permiso contenido en el oficio número 207.1-4-496 de once de enero de mil novecientos sesenta y siete, confirmado con el oficio número 207.1-4221 de 17 de octubre del citado año, conforme a los contratos de explotación antes referidos, los cuales estaban inscritos en el Registro Público Nacional de la Propiedad Forestal; constancia de la misma fecha, extendida por el Director Técnico de la Unidad Industrial de Explotación Forestal "Triplay y Maderas de Durango", Sociedad de Responsabilidad Limitada, de la Secretaría de Agricultura de Recursos Hidráulicos, en la que se asienta que en la oficina del Registro Público Nacional de la Propiedad Forestal se encontraban registrados los contratos de explotación forestal de los lotes 2-G al 8-G del fraccionamiento "San Dimas, Carboneras, Puenteceñas y sus Demasías", bajo los folios 59, 56, 64, 61, 57, 56 y 63 del libro I como III, volumen 1; constancia de la referida fecha extendida por "Triplay y Maderas de Durango" en la que se manifiesta que la empresa ha pagado las liquidaciones correspondientes a cada uno de los propietarios de los lotes del



## JUICIO AGRARIO No. 182/93

fraccionamiento respecto de la explotación forestal que se ha realizado en cada lote; siete certificaciones del catorce de abril de mil novecientos ochenta y dos, extendidas por el Recaudador de Rentas de la Ciudad de Durango, haciendo constar que los propietarios están inscritos en dicha oficina con actividades de venta de arbolado en pie bajo el régimen de causantes menores; constancia de treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta y dos, expedida por el contador Alberto Rolando Cano, afirmando que presta sus servicios profesionales, para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales derivadas de su actividad de venta de arbolado en pie, a los propietarios de los lotes 2-G al 8-G; siete certificaciones extendidas por el Recaudador de Rentas de Tayoltita, Durango, haciendo constar que los propietarios de los lotes referidos se encuentran al corriente del pago del impuesto predial respectivo.

Con los elementos anteriores la Dirección General de Procuración, Quejas e Investigación Agraria, emitió su dictamen el nueve de septiembre de mil novecientos ochenta y dos, en los siguientes términos: "... Primero, en el presente caso los propietarios María del Socorro Ibarra Lizárraga, Eduardo Muñoz Cigarroa, Manuel Hinojos Rodríguez, Raúl García del Avellano, Jaime Hinojos Castillo, Esteban Bueno Robles y Carlos Solís Colmeneros, probaron que explotan para su beneficio los inmuebles de su propiedad, en consecuencia no existe simulación en la explotación de las fincas.- Segundo. - Se declara improcedente el juicio de nulidad de fraccionamiento de propiedades afectables por actos de simulación instaurado por acuerdo de inicio publicado en el Periódico Oficial del Estado de Durango el veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y uno...".

DÉCIMO SEGUNDO. El nueve de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, el Cuerpo Consultivo Agrario aprobó acuerdo ordenando la instauración del procedimiento respectivo para declarar la nulidad de los acuerdos presidenciales de inafectabilidad de los lotes 2-G, 3-G, 4-G, 5-G, 6-G, 7-G y 8-G, todos del fraccionamiento "San Dimas, Carboneras, Puenteceillas y sus Demasías", ubicados en el Municipio de San Dimas, Estado de Durango, por considerar que se configuraban las hipótesis que preceptúan las fracciones III y IV del artículo 418 de la Ley Federal de

## JUICIO AGRARIO No. 182/93

Reforma Agraria, en relación con el artículo 261 de la misma ley. Asimismo ordenó que se solicitara a la Dirección General de Quejas e Investigación Agraria que con base en los elementos que obraban en el expediente de primera ampliación de ejido del poblado "Carboneras y Anexos", emitiera opinión complementaria respecto del procedimiento de nulidad de fraccionamiento por actos de simulación relativo a los lotes 2-G al 8-G, del fraccionamiento "San Dimas, Carboneras, Puenteacillas y sus Demasías".

En cumplimiento de lo anterior, la Dirección General de Tenencia de la Tierra acordó la instauración del procedimiento tendiente a declarar la nulidad de los siguientes acuerdos presidenciales:

- 1) Acuerdo de nueve de junio de mil novecientos sesenta y nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de agosto del mismo año, en virtud del cual se declaró inafectable con fines agrícolas a favor de María del Socorro Ibarra, el predio denominado "El Embudo", o "Lote 2-G", con superficie de 505-00-00 (quinientas cinco) hectáreas.
- 2) Acuerdo de veintinueve de enero de mil novecientos sesenta y nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de marzo del mismo año, en virtud del cual se declaró inafectable con fines agrícolas a favor de Eduardo Muñoz Cigarroa, el predio denominado "Bola", o "Lote 3-G", con superficie de 793-00-00 (setecientos noventa y tres) hectáreas.

3) Acuerdo de cinco de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de febrero de mil novecientos setenta, en virtud del cual se declaró inafectable con fines agrícolas a favor de Manuel Hinojos Rodríguez, el predio denominado "La Centella", o "Lote 4-G", con superficie de 801-00-00 (ochocientas una) hectáreas.

4) Acuerdo de veintinueve de enero de mil novecientos sesenta y nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de marzo del mismo año, en virtud del cual se declaró inafectable con fines agrícolas a favor de Raúl García del Avellano, el predio denominado "Los

## JUICIO AGRARIO No. 182/93

Mimbres", o "Lote 5-G", con superficie de 800-00-00 (ochocientas) hectáreas.

5) Acuerdo de nueve de junio de mil novecientos sesenta y nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de agosto del mismo año, en virtud del cual se declaró inafectable con fines agrícolas a favor de Jaime Hinojos Castillo, el predio denominado "San Miguel", o "Lote 6-G", con superficie de 800-00-00 (ochocientas) hectáreas.

6) Acuerdo de siete de mayo de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de julio del mismo año, en cumplimiento del cual se expidió el certificado de inafectabilidad agrícola número 199930 a favor de Bartolo Bueno Robles, para amparar el predio denominado "Sauces", o "Lote 7-G", con superficie de 412-00-00 (cuatrocientas doce) hectáreas.

7) Acuerdo de siete de mayo de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de julio del mismo año, en cumplimiento del cual se expidió el certificado de inafectabilidad agrícola número 199931 a favor de Carlos Solís Colmeneros, para amparar el predio denominado "La Majada" o "Lote 8-G", con superficie de 176-00-00 (ciento setenta y seis) hectáreas.

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS  
SECRETARÍA DE ACUERDOS  
DTO. 7, DURANGO, DGO

Previo análisis y valoración de las pruebas y alegatos presentados por los interesados, la referida Dirección emitió su dictamen el dos de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, declarando procedente la cancelación de los certificados de inafectabilidad agrícola que amparaban los predios de que se trata.

El veinte de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, la Dirección General de Procuración, Quejas e Investigación Agraria emitió su dictamen jurídico complementario respecto del procedimiento de nulidad de fraccionamiento por actos de simulación, en los siguientes términos: "... PRIMERO.- de conformidad con los antecedentes y razones expuestos en el Considerando Tercero, sobre las fracciones 2-G, 3-G, 4-G, 5-G, 6-G, 7-G y 8-G del predio

denominada "SAN DIMAS, CARRONERAS, PUENTECILLAS Y SUS DEMASIAS" del Municipio de San Dimas, Durango, propiedad de los CC. MARIA DEL SOCORRO IBARRA, EDUARDO MUÑOZ CIGARROA, MANUEL HINOJOS RODRIGUEZ, RAÚL GARCÍA DEL AVELLANO, JAIME HINOJOS CASTILLO, BARTOLO BUENO ROBLES Y CARLOS SOLÍS COLMENEROS, se considera que se configura la hipótesis normativa a que se refiere el artículo 210, fracción III, inciso a) de la Ley Federal de Reforma Agraria..."

DÉCIMO TERCERO. El quince de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, el Cuerpo Consultivo Agrario, dictaminó sobre el procedimiento de cancelación de los certificados de inafectabilidad, en los siguientes términos: "... PRIMERO. Se cancelan los Certificados de Inafectabilidad números 199930, 199933, 200474, 200475, 200478, 200473 y 200479 y se dejan sin efectos jurídicos los Acuerdos Presidenciales de fechas 7 de mayo de 1968, 9 de junio de 1969, 29 de enero de 1969, 5 de diciembre de 1969, 29 de enero de 1969 y 9 de junio de 1969, publicados en el Diario Oficial de la Federación con fechas 1º de julio de 1968, 23 de agosto de 1969, 7 de marzo de 1969, 25 de febrero de 1970, 7 de marzo de 1969 y 23 de agosto de 1969, mediante los cuales se declararon inafectables los predios denominados "SALCES", "LA MAJADA", "EL EMBUSO", "LA BOLA", "LA CENTELL", "LOS MIMBRIS" Y "SAN MIGUEL", respectivamente, propiedad de los CC. Bartolo Bueno Robles, Carlos Solís Colmeneros, María del Socorro Ibarra, Eduardo Muñoz Cigarroa, Manuel Hinojos Rodríguez, Raúl García del Avellano y Jaime Hinojos Castillo..."

El ocho de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, el Secretario de la Reforma Agraria emitió acuerdo por virtud del cual dejó sin efectos jurídicos los acuerdos presidenciales y canceló los certificados de inafectabilidad agrícola a que dichos acuerdos habían dado origen, mismos que fueron referidos en el párrafo anterior.

DÉCIMO CUARTO. El Cuerpo Consultivo Agrario emitió su dictamen el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y dos y por considerar integrado el expediente lo remitió a este Tribunal para su resolución definitiva.

DÉCIMO QUINTO. Por auto de diez de febrero de mil novecientos noventa y tres, se tuvo por radicado el presente

expediente en este Tribunal Superior Agrario; habiéndose registrado bajo el número 182/93, el auto de radicación se notificó a los interesados y se comunicó a la Procuraduría Agraria para los efectos legales procedentes.

DÉCIMO SEXTO. Por oficio número 75504 de quince de marzo de mil novecientos noventa y tres, el Cuerpo Consultivo Agrario solicitó a este Tribunal Superior Agrario la remisión del expediente de que se trata, aduciendo que el mismo se encontraba estrechamente ligado a otro asunto que dicho Cuerpo Colegiado tenía en estudio.

DÉCIMO SÉPTIMO. El treinta de marzo de mil novecientos noventa y tres, el Tribunal Superior Agrario acordó devolver el expediente de mérito conforme a lo solicitado por el Cuerpo Consultivo Agrario.

DÉCIMO OCTAVO. El Cuerpo Consultivo Agrario remitió el multicitado expediente el diecinueve de abril del mismo año, habiendo agregado al mismo el legajo número XIII que contiene la opinión emitida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria sobre los alcances legales de la sentencia dictada el primero de octubre de mil novecientos noventa, que causó ejecutoria por auto de fecho diez de enero de mil novecientos noventa y uno, dictado por el Jefe de Tercero de la Secretaría de Justicia y Fomento en el Distrito Federal en el expediente de garantías número 1026/88 que concedió al Comité Particular Ejecutivo de la primera ampliación de ejido del poblado "Carboneras y Anexos", Municipio de San Dimas, Durango, el amparo de la justicia federal, para que el titular de la Dirección General de Tenencia de la Tierra diera trámite en breve término al expediente agrario formado con motivo de la solicitud de ampliación de ejido del poblado de que se trata, con el objeto de que el mismo quedará en estado de resolución y, en su oportunidad, se dictara sentencia conforme a derecho. Igualmente obran en dicho legajo fotocopias de diversos documentos, cuyos originales aparecen en los otros doce legajos que lo componen.

Asimismo, el referido Cuerpo Colegiado emitió un nuevo dictamen el catorce de abril de mil novecientos noventa y tres, proponiendo afectar una superficie mayor que

la señalada en el dictamen pronunciado el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y dos.

DÉCIMO NOVENO. En sesión de quince de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, este Tribunal Superior Agrario, pronunció su sentencia en los siguientes términos:

"PRIMERO. Es procedente la ampliación de ejido promovida por un grupo de campesinos del poblado "Carboneras y Anexos", Municipio de San Dimas, Estado de Durango.

SEGUNDO. No ha lugar a declarar nulo el fraccionamiento del predio "San Dimas, Carboneras, Puertecillas y sus Demasías", constituido por los inmuebles denominados "El Embudo o Lote 2-G", "Piedra Bola o Lote 3-G", "La Centella o Lote 4-G", "Los Mimbres o Lote 5-G", "San Miguel o Lote 6-G", "Sauces o Lote 7-G" y "La Majada o Lote 8-G", propiedad, respectivamente, de María del Socorro Ibarra, Eduardo Muñoz Cárdena, Manuel Hinojos Rodríguez, Raúl García del Avellano, Jaime Hinojos Castillo, Bartolomé Robles y Carlos Solís Colmeneros, toda vez que no se configura la hipótesis normativa de simulación a que se refiere el artículo 310, fracción III, inciso a) y b) de la Ley Federal de Reforma Agraria.

TERCERO. Es de dotarse y se dota, por concepto de ampliación de ejido, al poblado "Carboneras y Anexos", del Municipio de San Dimas, Estado de Durango, una superficie total de 1,096-00-00 (mil noventa y seis) hectáreas de agostadero en terrenos áridos, del predio "Santa Ana", propiedad de la compañía "Maderera Industrial de San Dimas", Sociedad de Responsabilidad Limitada, ubicado en el Municipio de San Dimas, Estado de Durango, afectable en la presente acción por exceder los límites de la pequeña propiedad, con fundamento en lo establecido por los artículos 209, relacionado con 249 interpretado en sentido contrario y el 250 de la Ley Federal de Reforma Agraria. Dicha superficie deberá ser localizada conforme al plano proyecto que obra en autos, acotada en el mismo con el número II, que

pasará a ser propiedad del ejido con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres, para constituir los derechos de los sesenta y un campesinos capacitados, cuyos nombres se relacionan en el considerando segundo de esta sentencia. En cuanto a la determinación del destino de las tierras, la asamblea resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículo 10 y 56 de la Ley Agraria vigente.

CUARTO. Se modifica el Mandamiento Gubernamental dictado el tres de agosto de mil novecientos sesenta y seis, en cuanto a la superficie concedida y causal de afectación."

VIGÉSIMO. Por escrito presentado ante la Oficialia de Partes del Tribunal Superior Agrario, el cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, Pedro Nolasco Madriles Reyes, Cresencia Martínez Suárez y Antonio Corral Reyes en representación del Núcleo de Población Ampliación de Ejido Carboneras y Anexos, demandaron al Amparo y la protección de la Justicia Federal, señalando como acto reclamado la referida sentencia, con lo que conoció del mismo al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que de la misma causa el número 2974/94, y resolvió en sesión de ocho de marzo de mil novecientos noventa y cinco, en los siguientes términos: PRIMERO.- Se SOBRISE en el juicio de amparo promovido por el Comité Particular Ejecutivo del NÚCLEO DE POBLACIÓN DE EJIDO 'CARBONERAS Y ANEXOS' del Municipio de San Dimas, Durango, respecto de los actos de las autoridades descritas en el quinto considerando de esta sentencia. SEGUNDA.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al NÚCLEO DE POBLACIÓN DEL EJIDO 'CARBONERAS Y ANEXOS', del Municipio de San Dimas, Durango, contra la sentencia de fecha quince de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, pronunciada por el Tribunal Superior Agrario en el expediente número 182/93."

Los razonamientos para conceder la protección federal se hicieron consistir en lo siguiente:

"...QUINTO.- Previo al estudio de los conceptos de violación expresados, con fundamento en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, este

## JUICIO AGRARIO No. 182/93

Tribunal se avoca al análisis de las causales de improcedencia que en el presente juicio pudieran existir, así como las alegadas por las partes.

En su demanda de amparo, los quejosos señalan como actos reclamados, además de la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior Agrario, diversos actos y abstenciones realizadas por el Cuerpo Consultivo Agrario y por el Presidente de la República, respecto de los cuales el presente juicio de amparo directo resulta improcedente.

En efecto, tal y como lo dispone el artículo 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo sólo es procedente contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo.

De esta forma, es claro que en este juicio sólo procede examinar la constitucionalidad de la sentencia definitiva pronunciada por el Tribunal Superior Agrario, no los actos reclamados distintos de este tipo de resoluciones, tal y como lo dispone el artículo 158, señalado.

De esta forma, se configura la causal de improcedencia prevista por el artículo 158, fracción XVIII, en relación con el 158, apartado 1, de la Ley de Amparo y lo conducente, entonces, es el artículo 74 de la Ley de la materia, respecto de los actos reclamados del Cuerpo Consultivo Agrario y del Presidente de la República.

Ahora bien, por lo que ve a la causal de improcedencia invocada por el representante legal de los terceros perjudicados, relativa a la ausencia de conceptos de violación y, como consecuencia, la no afectación al interés jurídico del núcleo de población quejoso, debe decirse, en este aspecto, que si bien los conceptos de violación expresados en la demanda de garantías adolecen de ciertas deficiencias e imperfecciones, no existe ausencia



## JUICIO AGRARIO No. 182/93

de los mismos, pues se expresa la conducta de la autoridad que se estima inconstitucional y la garantía inobservada, así, este Tribunal no considera que se actualice la causal prevista por el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo; además de que este Tribunal está obligado a suplirlos, en términos del artículo 227 de la Ley de Amparo.

SEXTO.- Son fundados los conceptos de violación que se hacen valer suplidos en deficiencia, tal y como lo ordena el artículo 227 de la Ley de Amparo, ya que los quejosos pertenecen al grupo de individuos tutelados por el artículo 212 del mismo ordenamiento.

Ahora bien, conviene recordar que la acción en la que se basó el juicio para demandar la nulidad del fraccionamiento en cuestión, es la contenida en el artículo 210, fracción III, inciso a) y b) de la Ley Federal de Reforma Agraria, entonces vigente.

Este artículo señala: 210.- La división y el fraccionamiento, así como la transmisión íntegra por cualquier título de predios afectables, se sujetarán por cuanto toca a la materia agraria, a las reglas siguiente: ... III. Se presume que hay simulación y en consecuencia el fraccionamiento no surtirá efectos en materia agraria en los siguientes casos: a) Cuando no haya deslinde o señalamiento efectivo sobre el terreno, o cuando las señales divisorias se haya colocado después de la fecha de publicación de la solicitud de tierras; b) Cuando haya una concentración del provecho o acumulación de beneficios provenientes de la explotación de diversas fracciones, en favor de una sola persona....

Como puede observarse, esta causal de nulidad se refiere a la simulación de fraccionamientos, por tanto, debe entenderse que, como toda simulación de actos resulta difícil, sino imposible, su demostración a través de pruebas directas, pues, por el contrario, debe inferirse con base en

JUICIO AGRARIO No. 182/93

presunciones apoyadas, a su vez, en hechos que si  
estén debidamente acreditados.

Así, lo ha señalado reiteradamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente en la Jurisprudencia número 1793, publicada en la página 2891, Segunda Parte, del Apéndice 1917-1988 al Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SIMULACIÓN, PRUEBA DE LA, MEDIANTE PRESUNCIONES.- La simulación es por regla general refractaria a la prueba directa, de tal manera que para su demostración, tiene capital importancia la prueba de presunciones".

Por su parte, la cuarta tesis relacionada a la anterior jurisprudencia, página 2892 del mismo tomo, señala: 'SIMULACIÓN, CONCEPTO DE LA.- Debe entenderse por simulación la existencia de un contrato aparente, rigido por otro celebrado a la vez y mantenido en secreto por las partes; es decir, la declaración de un contenido de voluntad no real, emitida consciente y de acuerdo entre las partes, para producir, con fines del engaño, la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquél que realmente se ha llevado a cabo. . .

De esta forma, y si bien el Tribunal Superior Agrario está dotado de autonomía jurisdiccional y tiene libertad para apreciar y valorar las pruebas aportadas en los asuntos de su competencia, tal autonomía no puede llevarse al extremo de ignorar o pasar por alto reglas y principios (como los contenidos en las anteriores tesis), que han sido establecidas por el más Alto Tribunal del País.

En estas condiciones, se advierte que el citado Tribunal Agrario pasa por alto una serie de hechos que deben, necesariamente, estudiarse en su conjunto para determinar si la suma de tales hechos o circunstancias resultan aptos para demostrar si existe o no la mencionada simulación de fraccionamientos; pero no como lo realiza, estudiando en forma incompleta los indicios de

## JUICIO AGRARIO No. 182/93

simulación, para luego apoyarse, casi exclusivamente, en las pruebas que aportan los tercero perjudicados, (contratos, recibos, de pagos, declaraciones y pagos de impuestos, etc.), no porque estas pruebas deban ser ignoradas, sino que al estudiarse una simulación, las pruebas directas se refieren, generalmente, sólo a los hechos que sirven para cubrir la acción simulada, mientras que la simulación en sí, sólo puede demostrarse a través de presunciones y hechos que sólo examinados en su conjunto (y a través de la suma de ellos) pueden inclinar el ánimo del juzgador.

Dentro de los hechos que la responsable no examina cabalmente, se encuentran los asentados en el informe de fecha 15 de enero de 1979 (fojas 85 a 92 del Legajo de pruebas VI), en el informe de fecha 23 de abril del mismo año (fojas 105 a 113 del Legajo de pruebas IV), y en el acta relativa a la inspección ocular practicada el 8 de diciembre de 1978 (fojas 95 a 102 del Legajo VI), en ellos se advierten los siguientes hechos:

a) Que los predios inspeccionados, 2G a 8G, forman una unidad topográfica, ya que no existe señalización entre los mismos (sean brechas o mojoneras).

b) Que Jesús del Valle Ruiz es el encargado de todos los predios mencionados.

c) Que el licenciado Víctor Manuel Cano Cooley es apoderado de todos los propietarios.

d) Que en ninguno de los predios existe casa habitación.

e) Que el único de los propietarios que fue localizado en el área, Bartolo Bueno Robles (propietario del lote 7G no supo proporcionar el nombre de la compañía que explota los productos forestales de su predio (es decir, con quien supuestamente ha celebrado varios contratos de

## JUICIO AGRARIO No. 182/93

explotación forestal), y que desconoce también el monto anual que recibe por concepto de esa explotación, y añade que esos datos los podía proporcionar su apoderado Víctor Manuel Cano.

f) También se advierte que el sueldo del único trabajador de estos predios, lo cubre el apoderado Víctor Manuel Cano.

Este Tribunal, también advierte que las escrituras de compra-venta de todos los predios (2G a 8G) fueron pasadas ante la fe pública del mismo Notario Leonardo M. Alvarez, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa (fojas 88 a 142 del Legajo I); también se observa que el anterior apoderado de todos los propietarios, Ángel del Palacio Junior, compareció a sustituir los poderes a él conferidos, en favor de Víctor Manuel Cano (fojas 143 a 185 del Legajo I).

El apoderado de los propietarios, Víctor Manuel Cano Cooley, fue quien celebró la totalidad de los contratos de explotación forestal en nombre de sus mandantes (fojas 233 a 273 del Legajo III).

A fojas 285 del Legajo III, se advierte que el señor Alberto Rolando Cano Cooley, proporciona servicios contables y se encarga del pago de impuestos de todos los propietarios del fraccionamiento que se tacha como simulado.

Ahora bien, como puede observarse en la sentencia reclamada, con excepción del punto marcado con el número a), ninguno de estos hechos fueron analizados por el Tribunal Superior Agrario al emitir el acto reclamado.

Además, no pasa inadvertido para este Tribunal que todos los actos relativos a estos predios han sido realizados por interpósita persona, y no por sus propietarios, incluida la celebración del contrato de compra-venta de los mismos ante Notario Público que fue hecha, o bien, a través de un apoderado, o bien a través de la protocolización

del contrato respectivo. Se destaca, de igual forma, que todos los poderes que tenían conferidos en favor de una persona, fueron sustituidos en favor de Víctor Manuel Cano Cooley.

Así, no deja de causar extrañeza que ninguno de los propietarios ha comparecido, de manera personal, en defensa de sus predios (excepción hecha de Bartolo Bueno, quien acudió a la referida inspección ocular, y desconocía datos como el nombre de la compañía con quien había celebrado contrato de explotación forestal y los montos que recibía anualmente por el mismo); lo cual, si bien no es una conducta ilícita, cobra especial relevancia cuando se trae a colación que, en la especie, se alega la simulación de fraccionamientos.

Asimismo, no hay que perder de vista que todos ellos cuentan con certificado de inalienabilidad, lo que hace suponer que se trata del único predio rural con que cuentan respecto del predio. Una actitud contraria a la lógica jurídica humana, ni siquiera se han preocupado por mantener constantemente señalada y delimitada, durante esta propiedad, ni siquiera con brechas o mojoneras (para el caso de que las vallas o cercas fueran imprácticas para el desarrollo de la explotación forestal, que es su destino).

En cuanto al hecho descrito en líneas precedentes con la letra a), el Tribunal Agrario concluye, en relación con el informe rendido por Alberto Quiñonez Benítez, que no especificó por qué los siete lotes formaban una unidad topográfica, si era por el sólo hecho de que no encontró mojoneras en los vértices de los inmuebles o si era porque la misma empresa se encargaba de la explotación de los mismos...

Aquí el Tribunal a quo parece restarle importancia al hecho de que los predios no estén efectivamente señalados, cuando, en términos del artículo 210, fracción III, inciso a), antes

JUICIO AGRARIO No. 182/93

transcrito, dicha falta de señalización hace presumir la simulación de fraccionamientos.

Por lo que ve al hecho de que con anterioridad sí hubieran estado señalados los límites de los predios mediante mojoneras y brechas (colocadas en 1965, según el decir de Bartolo Bueno Robles, en la inspección ocular llevada a cabo el ocho de diciembre de mil novecientos setenta y ocho - foja 102 del Legajo VI-), como ya se apunto en líneas precedentes, no deja de parecer ilógico, desde un punto de vista jurídico y humano, que los pequeños propietarios no se preocuparan, de manera constante, en delimitar sus predios.

En las anteriores condiciones, lo procedente es conceder el amparo y la protección solicitados para el efecto de que el Tribunal Superior Agrario estudie y analice las pruebas y elementos antes precisados para que, conjuntamente con el resto de los medios probatorios aportados, pronuncie la sentencia que en derecho proceda."

VIGÉSIMO PRIMERO. Este órgano jurisdiccional, en su carácter de autoridad responsable ordenadora, en acatamiento a la ejecutoria de amparo antes precisada, con fundamento en los artículos 80, 104 y 105 de la Ley de Amparo; tercero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, que reformó el artículo 27 constitucional; cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y tercero transitorio de la Ley Agraria, acordó, el siete de junio de mil novecientos noventa y cinco, declarar insubsistente la sentencia definitiva dictada el quince de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, en el juicio agrario 182/93, y ordenó turnar de nueva cuenta el expediente del juicio agrario del que provienen los actos reclamados al Magistrado Ponente, licenciado Rodolfo Veloz Ramuelos, para que en su carácter de instructor, formulara el proyecto de resolución definitiva para someterlo a la aprobación de este cuerpo colegiado.

## JUICIO AGRARIO No. 182/93

VIGÉSIMO SEGUNDO. Por oficio número 16/95 de cinco de julio de mil novecientos noventa y cinco, el Director de Cumplimiento de Ejecutorias remitió al Magistrado Instructor, licenciado Rodolfo Veloz Bañuelos, el expediente de mérito, con la finalidad de continuar con la cumplimentación de la ejecutoria dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo D.A.2074/94, el ocho de marzo de mil novecientos noventa y cinco.

VIGÉSIMO TERCERO.- Por escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal Superior Agrario el once de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, María del Socorro Ibarra Lizárraga; Jorge Eduardo Muñoz Franco, en su carácter de albacea de la sucesión de su extinto padre Eduardo Muñoz Cigarroa, personalidad que acredita con la copia debidamente certificada del proveído judicial emitido el veinte de abril de mil novecientos noventa y dos, por el Juez Primera Instancia de lo Familiar en Mazatlán, del Estado de Sinaloa, en los autos del juicio sucesorio intestamentario a bienes del difunto antes citado, mismo que se acompaña al escrito; Ingeniero Francisco Javier Pérez Gavilán León, en su carácter de representante legal de la empresa denominada "Productora de Triplay" Sociedad Anónima de Capital Variable, quien es causahabiente de María Castillo Chacón Vda. de Hinojos, Mario Armando, Jaime Enrique, Víctor Manuel, Francisco Arturo y Federico, éstos cinco de apellidos Hinojos Castillo, siendo los seis citados en último término herederos del extinto Manuel Hinojos Rodríguez; Mario Armando Hinojos Castillo en representación de su hermano Jaime Enrique Hinojos Castillo; Guillermo Octavio Pérez Gavilán León y Lorena Avilés de Pérez Gavilán, ambos en ejercicio de la patria potestad de su menor hijo de nombre Roberto Pérez Gavilán Avilés, quien a su vez es causahabiente de Raúl García del Avellano; Bartolo Bueno Robles; Armando Solís Mercado, como causahabiente de su padre Carlos Solís Colmeneros e ingeniero Francisco Javier Pérez Gavilán León, como apoderado de la empresa denominada "Forestal Halcón", Sociedad Anónima de Capital Variable, personalidad ésta y la antes citada que se acredita con las copias debidamente certificadas de las Actas de Asambleas Generales de Accionistas que le otorgaron tal representatividad, las cuales se acompañan al ocurso, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones

## JUICIO AGRARIO No. 182/93

el despacho ubicado en el número 506 del edificio número 96 de las calles de Hidalgo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Distrito Federal y en la Ciudad de Durango el Despacho ubicado en el número 502 poniente de las calles de Aquiles Serdan, habiendo autorizado y compareciendo con la finalidad de manifestar su desacuerdo con la sentencia emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en relación al juicio de amparo número 1774/94 promovido por los campesinos solicitantes de la segunda Ampliación de ejido del poblado "Carbonera y Anexa" del Municipio de San Dimas, Durango, y con el objeto de respaldar los alegatos que en dicho escrito formularon, ofrecieron las pruebas que a continuación se relacionan:

1.- Copia certificada de la escritura pública volumen ciento sesenta y seis, número veintiséis mil seiscientos sesenta y seis, de fecha veintidós de octubre de mil novecientos sesenta y cinco, pasada ante la fe del licenciado Vicente Guerrero Iturbe, Notario Público número uno en la Ciudad de Durango, que contiene el acta constitución de la empresa "Maderera El Alcón", Sociedad de Responsabilidad Limitada.

2.- Copia certificada de la escritura pública volumen sexto, número mil quinientos treinta y tres, de fecha treinta de julio de mil novecientos setenta y cinco, pasada ante la fe del licenciado José H. Octavio Almada Ruiz, Notario Público en el Estado de Sinaloa, con Residencia en la Ciudad de Mazatlán, que contiene la protocolización del Acta de Asamblea de Accionistas de la empresa citada en el párrafo anterior, por medio de la cual se cambia de razón social a la misma, para que en lo sucesivo se denomine "Forestal El Alcón", Sociedad de Responsabilidad Limitada.

3.- Copia certificada de la escritura pública volumen vigésimo sexto, número mil ciento treinta y cinco, de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, pasada ante la fe del licenciado José H. Octavio Almada Ruiz, Notario Público en el Estado de Sinaloa con residencia en el Estado de Mazatlán, que contiene la protocolización del Acta de Asamblea General de Accionistas, por medio de la cual se designan nuevos Gerentes de la empresa "Forestal



## JUICIO AGRARIO No. 182/93

Halcón" y se les otorgan las facultades que en la misma acta se especifican.

4.- Copia certificada de la escritura pública volumen quinientos ochenta y seis, número quince mil seiscientos cincuenta y seis, de fecha catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, pasada ante la fe del licenciado Jesús Bermúdez Barba, Notario Público número ocho de la Ciudad de Durango, Durango, que contiene la protocolización del Acta de Asamblea General de Accionistas, celebrada el veinte de octubre de mismo año, por medio de la cual se admiten como nuevos socios de la empresa citada en el párrafo anterior a María del Socorro Ibarra, Jorge Eduardo Muñoz Franco, María Castillo Chacón Vda. de Hinojos, Jaime Enrique, Víctor Manuel, Federico, Francisco Arturo y Mario Armando, estos cinco de apellidos Hinojos Castillo, Roberto Pérez Gavilán Avilés, representado por sus padres los señores Guillermo Octavio Pérez Gavilán León y Lorena Avilés López de Pérez Gavilán, Bartolo Bueno Robles y Armando Solís Mercado.

5.- Copia certificada del permiso de aprovechamientos forestales para la explotación de los predios invaluados en el juicio de que se trata, expedido en favor de la empresa "Forestal Halcón", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, para el año de mil novecientos noventa y cinco.

6.- Copia certificada de tres recibos de liquidación de cuotas obrero patronales de la empresa citada en el párrafo que precede, correspondiente al quinto bimestre de mil novecientos noventa y cinco, a los cuales se acompañan las cédulas de liquidación de las cuotas de referencia en las que aparecen los nombres de los trabajadores que laboran para dicha empresa y se especifica el número de afiliación como asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social y las percepciones de los mismos.

7.- Copia certificada de la escritura pública volumen quinientos doce, número catorce mil trescientos treinta y dos, de fecha veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, pasada ante la fe del licenciado Jesús Bermúdez Barba, Notario Público número ocho de la Ciudad

de Durango, Durango, por virtud de la cual Raul Garcia del Avellano y su esposa, vendieron al menor Roberto Pérez Gavilán Avilés, representado en este acto por sus padres Guillermo Octavio Pérez Gavilán Leal y Lorena Avilés López de Pérez Gavilán, el lote número 5-G del predio rústico denominado "San Dimas, Carboneras, Puente de Cillas y sus Demasías".

8.- Contrato de compraventa celebrado por Guillermo Octavio Pérez Gavilán Leal y Lorena Avilés López de Pérez Gavilán, propietarios del lote número 5-G del predio rústico denominado "San Dimas, Carboneras, Puente de Cillas y sus Demasías", y la compañía "Forestal Halcón" Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

9.- Contrato de compraventa celebrado por Maria del Socorro Barra Lizarraga, propietaria del lote número 2-G, Jorge Eduardo Muñoz Franco, en representación de la sucesión intestamentaria de su padre Eduardo Muñoz Cigarroa, quien en vida fuera propietario del lote número 3-G, Mario Armando Hinojos Castillo, propietario del lote número 4-G, Jaime Enrique Hinojos Castillo, en representación de Maria Castillo Chacón Vda. de Hinojos, Jaime Enrique, Victor Manuel, Federico, Francisco Arturo, todos de apellidos Hinojos Castillo a nombre propio, y en su carácter todos ellos de propietarios del lote número 4-G, Jaime Enrique Hinojos Castillo propietario del lote número 6-G, Bartolo Bueno Robles propietario del lote número 7-G, Armando Solís Mercado en representación de la sucesión intestamentaria de su padre Carlos Solís Collameros quien en vida fuera dueño del lote número 8-G del predio rústico denominado "San Dimas, Carboneras, Puente de Cillas y sus Demasías", y la compañía "Forestal Halcón" Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. DCS

10.- Copia de la escritura pública volumen ciento setenta y seis, número veintisiete mil trescientos, de fecha siete de noviembre de mil novecientos sesenta y seis, pasada ante la fe del licenciado Vicente Guerrero Iturbe, Notario Público número uno en la Ciudad de Durango, Durango, que contiene la protocolización del Acta Constitutiva de la empresa denominada "Productora de Triplay", Sociedad Anónima.

## JUICIO AGRARIO No. 182/93

11.- Copia certificada de la escritura pública volumen cuatrocientos cuarenta y tres, número trece mil novecientos cincuenta y ocho de fecha veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres, pasada ante la fe del licenciado Jesús Bermúdez Barba, Notario Público número ocho en la Ciudad de Durango, Durango, que contiene la protocolización del Acta de Asamblea General de Accionistas de la empresa "Productora de Triplay", Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada el veinticinco del mismo mes y año.

12.- Copia de la escritura pública, volumen seiscientos ocho, número dieciséis mil veintiocho, de fecha seis de marzo de mil novecientos noventa y cinco, pasada ante la fe del licenciado Jesús Bermúdez Barba, Notario Público número ocho en la Ciudad de Durango, Durango, que contiene la adquisición, por parte de la empresa mencionada en el párrafo anterior, respecto del inmueble denominado Lote "4-C" del fraccionamiento del predio "San Dimas", arborescencias, Puente de las Demasias, del Municipio de San Dimas, Estado de Durango.

13.- Copias certificadas de dos recibos de liquidación de cuotas obrero-patronales correspondientes al quinto bimestre del año en curso, a las que se adjuntan las cédulas de liquidación de las cuotas antes mencionadas, donde aparece la lista de los trabajadores que laboran en la empresa "Productora de Triplay", Sociedad Anónima de Capital Variable y se plasma el número de afiliación de dichos trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

14.- Copia certificada de la escritura pública volumen cincuenta y uno, número tres mil ciento diecinueve, pasada ante la fe de la licenciada Margarita Valdez Serrano, Notario Público número cinco de la Ciudad de Durango, Durango, que contiene la protocolización del Acta Constitutiva de la empresa denominada "Molduras Halcón", Sociedad Anónima de Capital Variable.

15.- Copia certificada de un recibo de liquidación de cuotas obrero-patronales a la que se adjunta la cédula de liquidación de las cuotas antes citadas y se contiene los nombres de las personas que laboran en la mencionada empresa y se plasma el número de filiación de esos trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

16.- Copia certificada del auto de nueve de abril de mil novecientos noventa y dos, dictado en el expediente número 1141/90 formado con motivo de la sucesión intestamentaria a bienes de Eduardo Ignacio Muñoz Cigarroa, en la que se declara herederos de dicha sucesión a Rebeca Franco Viuda de Muñoz y a Jorge Eduardo Muñoz Franco, y del auto dictado el veinte del mismo mes y año, por virtud del cual se designa albacea de la supradicha intestamentaria al citado en segundo término.

17.- Copia certificada del auto de doce de noviembre de mil novecientos noventa y tres, dictado en el expediente número 964/91 formado con motivo de la sucesión intestamentaria a bienes de Carlos Solís Colmeneros, en la que se declara herederos de dicha sucesión a Yolanda, Norma Patricia, Carlos, Armando, Belinda Alicia, Oscar Francisco, Concepción y María del Carmen de apellidos Solís Mercado, y del auto dictado el veintinueve del mismo mes y año, por virtud del cual se declara albacea de la sucesión de dicha intestamentaria a Armando Solís Mercado, y

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y RERENDOS  
DEPARTAMENTO GENERAL  
PRIMERO. Que este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, en su carácter de autoridad responsable ordenadora, en acatamiento de ejecutoria de amparo dictada en el toca D.A. 2074/94, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con fundamento en los artículo 104 y 105 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos: tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; 1º, 9º, fracción VIII y cuarto transitorio, fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

**SEGUNDO.** Que del estudio y análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que las tierras concedidas al poblado peticionario, por concepto de dotación, están totalmente aprovechadas, por lo que se cumple con el requisito de procedibilidad establecido por el

artículo 241 de la Ley Federal de Reforma Agraria. Que la capacidad individual y colectiva del núcleo solicitante quedó acreditada al comprobarse que, en el mismo, radican más de diez campesinos que reúnen los requisitos de capacidad individual que establece el artículo 200 del invocado ordenamiento, toda vez que del censo practicado resultaron los siguientes 61 (sesenta y un) campesinos capacitados:

- 1.- José Saucedo M., 2.- Crescencio Martínez, 3.- Primo Martínez, 4.- José Alberto del Valle, 5.- Miguel del Valle, 6.- Zacarías Alvarado, 7.- Pedro Alvarado, 8.- Pedro de Alvarado, 9.- Carmen Ruiz V. de V., 10.- Mariana Herrera, 11.- Marcos Franco, 12.- Juan Franco, 13.- Virginia Calderón, 14.- Refugio López, 15.- Justo Reyes, 16.- Simón Reyes, 17.- María Isabel Martínez, 18.- J. Guadalupe Sarabia, 19.- Ma. Ramona Moreno, 20.- Jesús Ontiveros, 21.- Antonio Corral, 22.- Ma. Natividad Córdoba, 23.- Manuel Zepeda, 24.- Gregorio Zepeda, 25.- Crispín Zepeda A., 26.- José Reyes, 27.- María Pineda, 28.- Lino Núñez B., 29.- Magdaleno Beltrán, 30.- Estanislao Núñez, 31.- Pedro Sánchez, 32.- Abundio Chávez, 33.- J. Jesús Enriquez, 34.- Francisco Santos, 35.- Agustín Herrera, 36.- Faustino Herrera, 37.- Juan Martínez, 38.- Apolonio Sánchez, 39.- Casmo Sánchez, 40.- Pedro Molledo, 41.- Celestino, 42.- Everardo Herrera, 43.- Eusebio Reyes, 44.- Federico Reyes, 45.- Martín Reyes, 46.- Félix Martínez, 47.- Ismael Martínez, 48.- Ma. Hilaria Guerrero, 49.- Romero Luna, 50.- Ramón García, 51.- Luis García, 52.- Bruno Reyes, 53.- Celso García, 54.- Rafael Alvarado, 55.- Aurelio Reyes, 56.- Nieves Villanueva, 57.- Fernando del Valle, 58.- Buadelina Maldonado, 59.- Javier Alvarado, 60.- Guillermo Reyes, 61.- Gildardo Alvarado.

Que se dio cumplimiento en primera instancia a lo dispuesto por los artículos 50, 51, 54, 97, 217, 220, 237 y 238 del Código Agrario de 1942, correlativos de los artículos 197, 200, 241, 272, 275, 291, 292 y 304 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

TERCERO. Que de las actuaciones practicadas en primera instancia, se advierte que el Mandamiento del Gobernador del Estado de Durango ordenó afectar el predio "Santa Ana", con superficie de 3,080-00-00 (tres mil

ochenta) hectáreas de terrenos de agostadero cerril y monte, propiedad de la compañía "Maderera Industrial de San Dimas", Sociedad de Responsabilidad Limitada, pero que al pretender ejecutar dicho fallo, el veintinueve de agosto de mil novecientos setenta, se encontró que parte de la superficie afectada estaba en posesión de campesinos del poblado "Potrero o Rincón de las Calabazas", Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, razón por la cual se ejecutó de forma parcial dicho mandato entregando al núcleo peticionario 1,096-00-00 (mil noventa y seis) hectáreas del citado predio.

Ahora bien, de acuerdo con la certificación del veintidós de marzo de mil novecientos setenta y nueve, expedida por el oficial del Registro Público de la Propiedad de Tlayoltita, Durango, se conoce que la compañía "Maderera Industrial de San Dimas", Sociedad de Responsabilidad Limitada, es propietaria del inmueble rústico denominado "Santa Ana", con una superficie registral de 2,500-00-00 (dos mil quinientas) hectáreas, inscrito en la citada oficina bajo el número 15, a fojas 145, frente del libro 118, tomo IV, del diez de septiembre de mil novecientos treinta y dos, no obstante el comisionado sólo localizó 1,096-00-00 (mil noventa y seis) hectáreas de dicho inmueble, por lo que se llegó al conocimiento de que la compañía "Maderera Industrial de San Dimas", Sociedad de Responsabilidad Limitada, también es propietaria del inmueble denominado "Oeste de Puenteillas", el que originalmente contó con 6,925-00-00 (seis mil novecientas veinticinco) hectáreas de terrenos de agostadero de mala calidad, de las que 704-00-00 (setecientos cuatro) hectáreas fueron materia de afectación al resolverse la acción agraria de dotación de tierras del poblado "El Maguay", Municipio de San Dimas, Estado de Durango, según Resolución Presidencial de veinte de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco, quedándole en consecuencia, en propiedad, una superficie de 6,221-00-00 (seis mil doscientas veintiuna) hectáreas, de las que 5,421-00-00 (cinco mil cuatrocientas veintiuna) hectáreas se destinaron para satisfacer necesidades agrarias de campesinos del poblado "Puenteillas", mediante Resolución Presidencial de once de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de enero de mil novecientos setenta y cinco, relativa a la primera ampliación de ejido de ese

poblado, reconociéndose en dicho fallo presidencial, como pequeña propiedad de la referida empresa, la superficie de 800-00-00 (ochocientas) hectáreas de terrenos de agostadero de mala calidad, que le quedaron de las citadas afectaciones al predio "Oeste de Puenteillas", superficie que se ubica fuera del radio legal del poblado que nos ocupa.

En este estado de cosas y en atención a lo dispuesto por el artículo 209 de la Ley Federal de Reforma Agraria, es de concluirse que si la compañía "Maderera Industrial de San Dimas", Sociedad de Responsabilidad Limitada es propietaria de 1,896-00-00 (mil ochocientas noventa y seis) hectáreas de terrenos de agostadero de mala calidad y monte, de las que 1,096-00-00 (mil noventa y seis) hectáreas pertenecen al predio denominado "Santa Ana", ubicado dentro del radio de siete kilómetros del poblado gestor, y las 800-00-00 (ochocientas) hectáreas restantes formaban parte de la finca "Oeste de Puenteillas", mismas que fueron respetadas como pequeña propiedad de la persona moral en cita por la Resolución Presidencial del once de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro, resulta legalmente afectable para resolver la presente acción agraria, la superficie de 1,096-00-00 (mil noventa y seis) hectáreas, por exceder los límites de la pequeña propiedad, atento a lo establecido por el artículo 249, interpretado en sentido contrario, en relación con el 250 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Por otra parte, como se indicó en antecedentes, dentro del trámite del expediente de ampliación de ejido del poblado "Carboneras y Anexos", se iniciaron y tramitaron los procedimientos de nulidad de fraccionamientos de propiedades afectables por actos de simulación y de nulidad de acuerdos de inafectabilidad y de cancelación de certificados de inafectabilidad agrícola, respecto del fraccionamiento del predio denominado "San Dimas, Carboneras, Puenteillas y sus Demasías", en los lotes 2-G o "El Embudo", 3-G o "Piedra Bola", 4-G o "La Centella", 5-G o "Los Mimbres", 6-G o "San Miguel", 7-G o "Sauces" y 8-G o "La Majada", ubicados en el Municipio de San Dimas, Estado de Durango, habiéndose iniciado el primero de ellos con motivo de los trabajos técnicos informativos realizados por los ingenieros Epifanio Acosta Aldrete, comisionado por la Delegación Agraria del Estado de Durango el catorce de junio de mil novecientos

## JUICIO AGRARIO No. 182/93

setenta y tres y José Luis Llanes Ramirez, también personal de dicha Delegación, quien rindió su informe el veintitrés de abril de mil novecientos setenta y nueve, y de la investigación realizada por el topógrafo Mario Alberto Quiñones Benítez, en el mes de enero de mil novecientos setenta y nueve y que conjuntamente con el zootecnista José Jesús Serna Ruiz fueron designados por la entonces Dirección General de Investigación Agraria, para practicar una inspección en los diversos lotes en que se fraccionó el predio denominado "San Dimas, Carboneras, Puentecillas y sus Demasías", Municipio de San Dimas, Estado de Durango, en los términos de lo establecido por la fracción III del artículo 210 de la Ley Federal de Reforma Agraria. Los operarios informaron al respecto, que dichos lotes se encontraban poblados de monte alto maderable y que eran explotados por la compañía denominada "Triplay y Maderas de Durango", Sociedad de Responsabilidad Limitada, los cuales formaban en su conjunto una unidad topográfica, ya que no existían señalamientos ni divisiones materiales que los identificaran y separaran entre sí, habiendo observado únicamente algunas mojoneras y brechas de por medio en las colindancias con los ejidos "Puentecillas" y "Carboneras"; que laboraba un solo trabajador para los siete lotes de nombre Jesús del Valle Ruiz, cuyo salario era pagado por el licenciado Victor Manuel Cano Cooley, representante legal de los propietarios, concluyendo tales constataciones, que existían indicios de una concentración de provechos o acumulación de beneficios en favor de la compañía "Triplay y Maderas de Durango", obtenidos de la explotación de los siete predios.

SECRET

DELEGACION GENERAL

Con base en lo anterior el siete de octubre de mil novecientos ochenta y uno, el Subsecretario de Asuntos Agrarios aprobó acuerdo de iniciación del procedimiento de nulidad de fraccionamientos de propiedades afectables por actos de simulación, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, el veintisiete de diciembre del propio año, mismo que fue tramitado con las formalidades que establece la ley de la materia, por la entonces Dirección General de Procuración, Quejas e Investigación Agraria, la que emitió su opinión el nueve de septiembre de mil novecientos ochenta y dos, declarándolo improcedente.



## JUICIO AGRARIO No. 182/93

Al fin bien, es de estimarse que la interpretación de los conceptos locales debe realizarse de forma integral, a fin de conocer cual era la intención del legislador al dictar la norma, congruente con lo cual cabe precisar que, si bien es cierto, el artículo 210, fracción III, inciso a), invocado por los solicitantes al demandar la nulidad del fraccionamiento del predio "San Dimas, Carboneras, Puenteclillas y sus Demarcas", establece que cuando no haya deslinde o señalamiento efectivos sobre el terreno debe presumirse la simulación y en consecuencia el fraccionamiento no surtirá efectos en materia agraria, también lo es que la fracción II del precepto en cita señala que la división y el fraccionamiento se considerarán válidos siempre y cuando la traslación de dominio en favor de los adquirentes se hubiera inscrito en el Registro Público de la Propiedad antes de la fecha de publicación de la solicitud, aún mediando autorización de la Secretaría de la Reforma Agraria para la realización del fraccionamiento, a la luz de la cual, el fraccionamiento en cuestión resulta válido, toda vez que, en la especie, la publicación de la solicitud data del diecinueve de abril de mil novecientos sesenta y cuatro, fecha posterior a la inscripción de los lotes 2G al 8G, misma que se efectuó el veintitrés de marzo de mil novecientos sesenta y tres, según certificación del Registro Público de la Propiedad de Tlalvita, San Dimas, Durango, previa autorización que el diecisiete de febrero de mil novecientos sesenta y uno, otorgó la Secretaría de la Reforma Agraria.

SECRETARÍA GENERAL  
DE ACUERDOS

De igual modo, una cabal interpretación de la fracción III del artículo 210 de la Ley Federal de Reforma Agraria lleva a concluir válidamente que, para tener por cierta la simulación de un fraccionamiento debe concurrir, cuando menos, uno de los cuatro supuestos jurídicos contenidos en la misma, y no ser objetado por prueba alguna en contrario, toda vez que, por tratarse de presunciones "juris tantum", se construyen a demostrar el hecho en que se fundan, estando su eficacia condicionada a la eventual existencia de pruebas en contrario, a la luz de lo cual, no puede sancionarse con la nulidad del fraccionamiento la presunción que se funda en los trabajos técnicos informativos practicados por los ingenieros Epifanio Acosta Aldrete y José Luis Juanes Ramírez, puesto que carecen de

## JUICIO AGRARIO No. 182/93

eficacia plena para demostrar la falta de mojoneras interiores en el fraccionamiento "San Dimas, Carboneras, Puenteclillas y sus Demasías", pues del resto de las constancias que obran en autos se advierte que en mil novecientos sesenta y cinco, el comisionado Salvador Guerrero Meza practicó trabajos técnicos dentro del expediente en que se actúa, habiendo informado que los lotes que integraban dicho fraccionamiento estaban identificados por medio de mojoneras que separaban los predios entre sí, así como que el fraccionamiento cuya nulidad se demanda se realizó, no solamente con antelación a la publicación de la solicitud de ampliación que se resuelve, sino que además hubo previa autorización de la autoridad entonces competente para dividir el predio "San Dimas, Carboneras, Puenteclillas y sus Demasías", según se conoce del oficio número XVIII.700093 de diecisiete de febrero de mil novecientos sesenta y uno, en virtud del cual la Dirección de Fraccionamientos y Terrenos Baldíos dependiente del entonces Departamento de Asuntos Agrarios, Colonización autorizó el fraccionamiento del predio "San Dimas, Carboneras, Puenteclillas y sus Demasías" en ocho lotes de 200-00-00 (ochocientos) hectáreas cada uno, y que las ventas de las partes no se realizaron con reserva de dominio, según quedó acreditado con las copias certificadas de las escrituras respectivas que obran glosadas al legajo III de los autos, por lo que es de estimarse que en el presente concreto, ni siquiera debió instaurarse el procedimiento de mérito.

No obstante lo anterior, de autos aparece que la autoridad agraria instauró y cesantó el procedimiento previsto en los artículos 399 al 405 de la Ley Federal de Reforma Agraria respecto de dichos predios, y en relación con el cual, la Dirección General de Procuración, Quejas e Investigación Agraria emitió opiniones contradictorias el nueve de septiembre de mil novecientos ochenta y dos y el veinte de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, mismas que carecen de definitividad, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, la autoridad competente para resolver en definitiva el procedimiento de nulidad de fraccionamientos simulados es éste Tribunal

## JUICIO AGRARIO No. 182/93

Superior Agrario, en cuyo tenor y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 197, 202, 207 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, a continuación se entra al estudio y valoración de las actuaciones que obran en autos, de las que se advierte que si bien es cierto los comisionados que llevaron a cabo la investigación que dio pie a la instauración del procedimiento de nulidad de fraccionamientos de propiedades afectables, manifestaron que los predios 2G al 8G del fraccionamiento "San Dimas, Carboneras, Puentecillas y sus Demasías" formaban una sola unidad topográfica, porque no existían señalamientos ni divisiones materiales que los identificaran y separaran entre sí, también lo es que tales aseveraciones son inciertas, ya que se contradicen con lo señalado por el comisionado Salvador Guerrero Meza en mil novecientos sesenta y cinco, así como con el informe rendido por el ingeniero Rufino Presa Monsiváis el diez de enero de mil novecientos setenta y siete, dentro del expediente del poblado "Puentecillas", mismo que fue aportado por los propietarios como prueba para demostrar que sus inmuebles estaban debidamente delimitados con señalamientos efectivos, documentos a los cuales en su conjunto se concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, toda vez que los citados ingenieros prestaban sus servicios en la Comisión Agraria Mixta, en cuyo carácter fueron designados por tal dependencia para investigar la situación real y jurídica que guardaban diversos inmuebles, entre los que se encontraban los predios propiedad de los oferentes, cuyos informes administrados con los análogos rendidos con motivo de los trabajos técnicos que propiciaron la instauración del procedimiento de nulidad de fraccionamientos llevan a concluir, lógica y jurídicamente que, si en mil novecientos sesenta y cinco y mil novecientos setenta y siete dichos predios estaban efectivamente delimitados con mojoneras de concreto, no es creíble que en mil novecientos setenta y tres y en mil novecientos setenta y nueve, se hubieran encontrado sin señalamientos interiores, sin que sea impedimento para llegar a esta conclusión el hecho de que el informe del ingeniero Rufino Presa Monsiváis hubiera sido rendido en diverso expediente, pues si bien, durante el desahogo de los trabajos practicados por éste profesional, no fueron oídos los solicitantes, no ocurrió lo mismo

respecto del citado en primer termino, y si resulta útil para confirmar que, el land que en mil novecientos sesenta y cinco, en mil novecientos sesenta y siete, existian divisiones internas entre los predios que conformaban el fraccionamiento de mérito.

De los demás hechos asentados en los informes de quince de enero y veintifour de abril de mil novecientos sesenta y nueve y del acta relativa a la inspección ocular practicada el ocho de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho, tampoco puede arrilarse a la conclusión de que se trata de un fraccionamiento simulado, ni siquiera puede inferirse que exista concentración de provechos en una sola persona, ya que los beneficios de los productos forestales de dichos predios los reciben cada uno de los propietarios en lo individual, según se conoce de las constancias que obran en autos, y si bien es cierto, existe un sólo trabajador encargado de la vigilancia de los siete lotes, cuyo sueldo es cubierto íntegramente por el apoderado de todos los propietarios, también lo es que, a través de la representación conferida mediante diversos mandatos protocolizados ante notario, otorgados individualmente por los propietarios, se realizaron válidas y suficientes actos jurídicos sobre el patrimonio de cada uno de dichos poderdantes, se facilitaron las relaciones jurídicas y se suprimieron obstáculos materiales de otro orden, como el alejamiento, la inexperiencia, o la falta de medios de ocupaciones, de donde se concluye, que fue precisamente en ejercicio de las facultades conferidas que, Víctor Manuel Cano Cooley contrató y realizó el consecuente pago al personal que consideró necesario para el cuidado y vigilancia de los lotes propiedad de sus mandantes, asimismo suscribió los contratos de explotación en su nombre, actos estos que por su propia naturaleza producen consecuencias en patrimonios ajenos al del apoderado, por lo que no puede causar extrañeza que sea un sólo individuo el encargado de la vigilancia, así como tampoco que sea un sujeto el apoderado de todos, pues resulta lógico desde un punto de vista jurídico y humano que, si el único aprovechamiento posible de los supradichos inmuebles es el forestal, cuya explotación requiere de conocimientos técnicos y del uso de maquinaria específica, los propietarios se valgan de los servicios de una empresa maderera para obtener los correspondientes beneficios, a cuyo tenor resulta apropiado

el nombramiento de un representante legal, a través del cual, no sólo la empresa en cuestión hace llegar los beneficios obtenidos de la extracción del arbolado de cada uno de los inmuebles a sus respectivos propietarios, sino que también los propietarios realizaron la defensa de sus inmuebles ante la autoridad agraria, sin que de ello pueda inferirse concentración de provechos alguna, que haga suponer una simulación de fraccionamientos.

No es óbice para llegar a la anterior conclusión, el hecho de que los comisionados agrarios hubieran manifestado que en ninguno de los predios había casa-habitación, pues no existe precepto alguno en materia agraria que establezca tal obligación a los propietarios de inmuebles rústicos, y si por el contrario, el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye el derecho que tiene todo hombre para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto o cualquier otro requisito, semejante por lo que el hecho señalado por los comisionados agrarios, tampoco puede tenerse como un indicio de simulación.

Asimismo, el hecho de que Bartolo Bueno Robles, propietario del lote 7-G, no hubiera proporcionado al comisionado el nombre de la compañía que explota los productos forestales de su inmueble ni el monto anual que con motivo de dicha explotación percibe, puede considerarse como un indicio de simulación. Se toma en cuenta de que, dicho propietario no estaba obligado a conocer al detalle el nombre de la compañía maderera que explota su inmueble, habida cuenta de que quien realizó las gestiones en su nombre fue su apoderado, y que no podía conocer el monto anual que percibía de la misma, en virtud de que la intensidad de corte anual en cada zona de aprovechamiento, está determinada por el permiso forestal correspondiente, razón por la cual la cantidad percibida es variable.

Ahora bien, las presunciones de simulación señaladas en el acuerdo aprobado por el Cuerpo Consultivo Agrario el primero de abril mil novecientos ochenta y uno, se desvanecen con las pruebas y alegatos que presentaron tanto el licenciado Juan Bravo Cuevas, apoderado legal de la

empresa "Triplay y Maderas de Durango", S. de R.L., como con los presentados por el licenciado Victor Manuel Cano Cooley, apoderado legal de los propietarios de los siete lotes del fraccionamiento "San Juan, Guilmeras, Puenteceillas y sus Demasias", las cuales se valoran en los términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, teniéndose al efecto, que respecto del indicio de simulación relativo a que los referidos lotes forman una sola unidad de explotación a cargo de la empresa "Triplay y Maderas de Durango", Sociedad de Responsabilidad Limitada, es de estimarse que ello se explica por sí solo, toda vez que se trata de inmuebles ubicados en la Unidad Industrial de explotación forestal constituida por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos en favor de "Triplay y Maderas de Durango", Sociedad de Responsabilidad Limitada para el abastecimiento de materia prima que se destinaria al consumo de la compañía industrial "Triplay y Maderas de Durango", Sociedad Anónima de Capital Variable, resultando en consecuencia lógicos que los propietarios celebraran contratos en cuyo texto se mencionan las superficies y colindancias de los lotes en estudio por virtud de los cuales la mencionada empresa realiza el correspondiente aprovechamiento, entregando los beneficios del mismo a cada uno de sus contratantes, debido sólo a las restricciones que dicho Decreto fijaba a todos los propietarios de predios ubicados dentro del área concesionada a dicha persona moral, sino también en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 1º, 3º fracción VIII, 87, 107 y 111 de la Ley Forestal publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de enero de mil novecientos sesenta, entonces vigente. A mayor abundamiento, como ya se dijo, los propietarios acreditaron con el informe rendido por el ingeniero Rufino Presa Monsiváis, el diez de enero de mil novecientos setenta y siete, que sus inmuebles estaban debidamente delimitados con señalamientos efectivos, documento que tiene el carácter de público y que hace prueba plena de los hechos por él afirmados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

En lo tocante al segundo indicio, referente a que la relación contractual de explotación forestal de los propietarios con la empresa no constituía certidumbre de que

los predios fueran explotados en forma individual por los primeros y al relativo a que la empresa no acreditó la realización de los correspondientes pagos a los propietarios, esto queda desvirtuado con los propios contratos de explotación forestal y compra venta de productos forestales celebrados entre los propietarios de los lotes y la empresa los días veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de junio de mil novecientos setenta y cinco y dos de enero de mil novecientos ochenta y uno, cuyas fotocopias aparecen agregadas a los autos debidamente certificadas por fedatario público, lo que da la certeza de la existencia de los originales, instrumentos privados que vinculados con las copias también certificadas de los recibos de pago extendidas por "Triplay y Maderas de Durango", Sociedad de Responsabilidad Limitada de dieciséis de noviembre de mil novecientos setenta y siete, dieciséis de marzo de mil novecientos setenta y ocho, siete y veintidós de diciembre de mil novecientos ochenta, quince de enero, dos de febrero y cinco de marzo de mil novecientos ochenta y dos, en los que se asientan las cantidades entregadas a los propietarios por concepto del arbolado extraído de los lotes de su dominio, así como con las certificaciones del recordador de rentas del Estado de Durango en las que hizo constar que los propietarios se encontraban inscritos en dicha oficina como causantes menores con actividades de venta de arbolado de pte. crean convicción acerca de que los propietarios recibían individualmente de su empresa maderera el producto de la explotación que ésta hacía de sus inmuebles.

No es óbice para llegar a la anterior conclusión el hecho de que los contratos de explotación referidos hubieran sido suscritos por el licenciado Víctor Manuel Cano Cooley a nombre de sus mandantes, pues como ya quedó señalado en párrafos anteriores, la representación es una institución jurídica a través de la cual se realizan válida y eficazmente actos jurídicos sobre un patrimonio ajeno, siendo lo propio de dicha representación la actuación del representante a nombre y en interés del representado, produciendo efectos en el patrimonio de éste último, y el hecho de que todos los propietarios hubieran optado por facultar a la misma persona mediante poder para actuar a nombre de ellos en lo referente a la explotación de los inmuebles de su respectiva propiedad, no implica que exista

JUICIO AGRARIO No. 182/93

simulación, menos aún si se toma en cuenta que el patrimonio de cada uno de ellos se ve incrementado con los recursos que reciben por la venta de sus productos forestales a la compañía maderera, y atestado por la carga impositiva correspondiente, como lo desprende de los recibos aportados como pruebas y de las certificaciones del recaudador de rentas.

En cuanto al inicio de que la explotación forestal que llevó a cabo la compañía "Triplay y Maderas de Durango", Sociedad de Responsabilidad Limitada, hasta antes del año de mil novecientos setenta y cuatro la efectuó a nombre de la compañía "Maderera Duranguense", Sociedad de Responsabilidad Limitada que era concesionaria del permiso de explotación forestal y del aprovechamiento que se había realizado a partir del año de mil novecientos setenta y cuatro, éste se desvanece con el contrato celebrado el veintiseis de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro, pasado ante la fe del Notario Público, licenciado Ignacio Alfonso Gastélum Junior en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, entre la empresa "Maderera Duranguense", Sociedad de Responsabilidad Limitada, en su carácter de usufructuaria de los lotes 2-G al 8-G del predio "San Dimas, Carboneras, Puente Cillas y sus Demasías", y "Triplay y Maderas de Durango", Sociedad de Responsabilidad Limitada, por virtud del cual la primera cede a la segunda el derecho de explotación forestal sobre los lotes citados, documento que fue inscrito bajo el número 196, a fojas 66, el veintiseis de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco, en el Registro Público Nacional de la Propiedad Forestal, del que se conoce que se fijó una contraprestación de diez dólares o su equivalente en moneda nacional, por cada dos metros trescientos cincuenta y nueve decímetros cúbicos de madera del arbolado maderable existente en dicho inmuebles.

Por lo que hace al indicio de que no se aportó ningún documento ni permiso expedido por la Subsecretaría Forestal y de la Fauna Silvestre, por medio del cual se hubiera autorizado directamente a dicha empresa a efectuar la explotación y de que tampoco existían antecedentes de que los contratos celebrados con la multicitada compañía estuvieran inscritos en el Registro Público Nacional Forestal, tal indicio se desvirtúa con la documental pública expedida el veinticinco de marzo de mil novecientos ochenta



## JUICIO AGRARIO No. 182/93

y dos, por el ingeniero Guillermo Alvarado González, Director Técnico de la Unidad Industrial de Explotación Forestal de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en la Ciudad de Durango, a través de la cual se conoce que los contratos celebrados para la explotación forestal de los lotes del 2-G al 8-G del fraccionamiento del predio tantas veces citado, se encontraban inscritos en el Registro Público Nacional de la Propiedad Forestal, que dichos lotes pertenecían al territorio de la Unidad Industrial de Explotación Forestal "Triplay y Maderas de Durango", Sociedad de Responsabilidad Limitada, por lo que dicha empresa ha explotado tales inmuebles al amparo del permiso contenido en el oficio número 207.1-4621 de once de octubre de mil novecientos sesenta y siete; asimismo, dicho funcionario manifestó que la empresa había venido pagando las liquidaciones que correspondían a cada uno de los propietarios de los lotes de este fraccionamiento, respecto de la explotación forestal que se ha realizado en cada lote, de conformidad a la autorización hecha por la Subsecretaría Forestal y de la Fauna a la concesionaria, precisando que en la fecha de la expedición de dicha constancia, la empresa había pagado ya la décima sexta anualidad.

Por lo que se refiere al indicio consistente en que los propietarios de los lotes celebraron contratos de explotación forestal con la compañía "Maderera Durangense", Sociedad de Responsabilidad Limitada, pero que aún vigente este compromiso, dichos propietarios habían pactado con la compañía "Triplay y Maderas de Durango", Sociedad de Responsabilidad Limitada, y que en virtud de que la primera de las citadas compañías no se inconformó con dicho contrato, se vislumbró que ambas compañías perseguían los mismos fines económicos y por ende eran las que concentraban los provechos y acumulaban los beneficios provenientes de la explotación de los referidos inmuebles, al respecto, es de considerarse que este indicio también se desvanece con los contratos de explotación forestal que presentaron los comparecientes en este procedimiento. Refuerzo de lo anterior es la copia del oficio número 1995 de dieciocho de julio de mil novecientos setenta y nueve, dirigido al entonces Subsecretario Forestal y de la Fauna de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, por el Director General de Información y Sistemas Forestales

dependiente de dicho notario, en el que se señala que el once de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco se inscribieron en el Registro Público Nacional de la Propiedad Forestal, las escrituras de constitución de usufructo que celebraron los propietarios citados con la compañía "Maderera Duranguense", Sociedad de Responsabilidad Limitada, el veintidós de marzo de mil novecientos sesenta y tres, por un término de veinte años a partir de esta fecha y al vencimiento del cual, entraba en vigor un contrato con duración de nueve años y once meses más, sin embargo, el veintiseis de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro, ésta compañía celebró un contrato con la empresa "Triplay y Maderas de Durango", Sociedad de Responsabilidad Limitada, en donde la primera cedió a la segunda, los derechos de explotación forestal sobre dichos lotes, con vigencia de diez años a partir de la fecha señalada, el cual fue inscrito el veintinueve de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco, en el Registro Público, detallándose en el oficio citado los números correspondientes a los registros y folios en que quedaron inscritos los contratos que celebró cada propietario, siendo estos datos coincidentes con los que aparecen en la constancia que expidió el Director Técnico de la Unidad Industrial de Explotación Forestal.

Respecto a las documentales públicas y privadas ofrecidas por los propietarios, por conducto de su representante legal, consistentes en copias de las escrituras de compra venta, así como de las certificaciones expedidas por el encargado del Registro Público de la Propiedad correspondiente, se considera que acreditan la forma y fecha de adquisición de los lotes 2-G al 8-G que resultaron del fraccionamiento del predio "San Dimas, Carboneras, Puenteillas y sus Demasías", así como que los mismos están inscritos en el Registro Público de la Propiedad a sus nombres, sin que pueda interpretarse como una presunción de simulación el hecho de que los contratos de compraventa se hubiera protocolizado ante el mismo notario, ya que el fraccionamiento se realizó, autorizó e inscribió en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, antes de la publicación de la solicitud de ampliación que se resuelve, e inclusive, antes de que los promoventes hicieran dicha petición a la autoridad agraria competente, situación que como ya quedó apuntado en párrafos

anteriores, provoca que el fraccionamiento de mérito surta todos sus efectos legales.

Asimismo, respecto de las fotostáticas de los planos de los inmuebles de que se trata y que fueron presentadas como probanzas por los ocurrentes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 133 y 203, relacionados con el 197 y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es de considerarse que tales documentos son accesorios a las escrituras de propiedad, consignando los mismos la localización, colindancias y superficie de los predios que se estudian.

No pasa inadvertido para este Tribunal el que se sustituyera al anterior apoderado de los propietarios por el actual, ni tampoco que todos tengan el mismo contador, sin embargo, considerando que la representación implica la actuación del representante o apoderado a nombre del representado, y que en el caso concreto por voluntad de los poderdantes ésta recaía en una sola persona, que los inmuebles son contiguos, se localizan en el mismo Municipio, la explotación está a cargo de la misma compañía maderera y los impuestos se cubren en la misma recaudación de rentas, resulta lógico que por economía y comodidad de los propietarios, no sólo que dicho apoderado fuera sustituido por otro y no por otros, sino que todos los propietarios llevarán sus asuntos contables con el mismo profesional.

Se omite la valoración del resto de las probanzas ofrecidas por los propietarios de los lotes del 2-G al 8-G, y que fueron descritas en el resultando décimo primero, en virtud de que ninguna de ellas guarda relación directa con el procedimiento sujeto a estudio, y porque además resultan irrelevantes, puesto que con el resto de las documentales tanto públicas como privadas que ofrecieron, quedó plenamente demostrado que en el presente caso no se dan los indicios de simulación previstos por el artículo 210, fracción III, incisos a) y b) de la Ley Federal de Reforma Agraria, consecuentemente no ha lugar a declarar nulo el fraccionamiento del predio "San Dimas, Carboneras, Puenteillas y sus Demasías", constituido por los inmuebles denominados "El Embudo o Lote 2-G", "Piedra Bola o Lote 3-G", "La Centella o Lote 4-G", "Los Mimbres o Lote 5-G", "San Miguel o Lote 6-G", "Sauces o Lote 7-G" y "La Majada o Lote

JUICIO AGRARIO No. 182/93

8-G", propiedad, respectivamente, de María del Socorro Ibarra Lizárraga, Eduardo Muñoz Cigarroa, Manuel Hinojos Rodríguez, Raúl García del Avellano, Jaime Enrique Hinojos Castillo, Bartolo Bueno Robles y Carlos Solís Colmeneros.

Por otra parte, como se señaló en los resultandos de la presente sentencia, dentro del procedimiento de ampliación de ejido del poblado que nos ocupa, se inició y tramitó el de nulidad y cancelación de los certificados de inafectabilidad agrícola números 200474, 200475, 200478, 200473, 200479, 199930 y 199933, que amparan respectivamente los predios denominados "El Embudo" o "Lote 2-G", "Piedra Bola" o "Lote 3-G", "La Centella" o "Lote 4-G", "Los Mimbres" o "Lote 5-G", "San Miguel" o "Lote 6-G", "Baudes" o "Lote 7-G", y "La Majada" o "Lote 8-G", del fraccionamiento del predio "San Dimas, Carboneras, Puentevillas y sus Demasías", ubicados en el Municipio de San Dimas, Estado de Durango, propiedad respectivamente de los señores María del Socorro Ibarra Lizárraga, Eduardo Muñoz Cigarroa, Manuel Hinojos Rodríguez, Raúl García del Avellano, Jaime Hinojos Castillo, Bartolo Bueno Robles y Carlos Solís Colmeneros, con superficies respectivamente de 505-00-00 (quinientas cinco) hectáreas, 93-00-00 (setecientas noventa y tres) hectáreas, 801-00-00 (ochocientas una) hectáreas, 100-00-00 (ochocientas) hectáreas, 1800-00-00 (ochocientas) hectáreas, 412-00-00 (cuatrocientas doce) hectáreas y 100-00-00 (ciento setenta y seis) hectáreas; al respecto es de considerarse, que el Secretario de la Reforma Agraria en uso de las facultades conferidas por el artículo 10, fracción XX de la Ley Federal de Reforma Agraria declaró la nulidad de los acuerdos de inafectabilidad dictados por el Ejecutivo Federal, cancelando por ende los mencionados certificados de inafectabilidad agrícola.

Que la devolución del expediente de que se trata, obedeció a que el Cuerpo Consultivo Agrario manifestó que lo requería para resolver un asunto que estaba relacionado con el poblado "Carboneras y Anexos", pero nunca argumento, ni este Tribunal consideró que la devolución se solicitara con el objeto de que dicho Cuerpo Colegiado pronunciara un nuevo dictamen, puesto que desde el veintitrés de septiembre ya había sido puesto en estado de resolución y radicado en este Tribunal, por lo que no es de tomarse en cuenta el dictamen de catorce de abril de mil novecientos noventa y tres,

## JUICIO AGRARIO No. 182/93

además de que los dictámenes del Cuerpo Consultivo Agrario no vinculan de modo alguno a éste Tribunal Superior Agrario, por estar dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos de conformidad con lo dispuesto por la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por el artículo 1º de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

Ahora bien, en virtud de que la ejecutoria que ahora se cumplimenta se traduce en la revocación de la sentencia dictada el quince de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, en el juicio agrario número 182/93 por este Tribunal Superior Agrario, para el efecto de que estudiara y analizara las pruebas y elementos precisados con el considerando quinto de la resolución de amparo, y conjuntamente con el resto de los medios probatorios aportados pronunciara la sentencia que en derecho proceda, y toda vez que los actuales propietarios de las distintas fracciones en que se dividió el predio "San Dimas, Carboneras, Puente de las Yucas y sus Benasias" aportaron diversas pruebas documentales que tienen el carácter de supervenientes, con fundamento en los artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles, en materia de esta materia, a continuación se entra al estudio y resolución de las mismas.

Con la copia certificada de la escritura pública que contiene el acta constitutiva de la empresa "Maderería Halcón", Sociedad de Responsabilidad Limitada, los oferentes demuestran que el veintidós de octubre de mil novecientos sesenta y cinco, Inés León de Pérez Gavilán y Leonor León de Pérez Carranco constituyeron la sociedad mercantil que denominaron "Maderería Halcón", Sociedad de Responsabilidad Limitada, cuyo objeto es la compra venta de maderas y materiales de construcción y todo lo relacionado con el ramo que se indica, según se conoce de la cláusula segunda de dicha acta.

Con la copia certificada de la escritura pública que contiene la protocolización del Acta de Asamblea de Accionistas de la empresa citada en el párrafo anterior, únicamente se demuestra que el treinta de julio de mil novecientos setenta y cinco se acordó cambiar la razón

SECRETARIA DE ACUERDOS  
D.T.O. 7, DURANGO, DGO

JUICIO AGRARIO No. 182/93

social a la misma, para que en lo sucesivo se denominara "Forestal Halcón", Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Con la copia certificada de la escritura pública de veintiocho de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, se demuestra que en esa fecha se protocolizó el Acta de Asamblea General de Accionistas, en la que se designaron nuevos Gerentes de la empresa "Forestal Halcón", con las facultades que en la misma acta se especifican.

Con la copia certificada de la escritura pública volumen quinientos doce, numero catorce mil trescientos treinta y dos, de fecha veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, pasada ante la fe del licenciado Jesús Bermúdez Barba, Notario Público número ocho de la Ciudad de Durango, Durango, por virtud de la cual Raúl García del Avellano y su esposa, vendieron al menor Roberto Pérez Gavilán Avilés, representado en ese acto por sus padres Guillermo Octavio Pérez Gavilán León y Lorena Avilés López de Pérez Gavilán, el lote número 5-G, del predio rústico denominado "San Dimas", Carboneras, Preterrito y sus Demasías y el contrato de usufructo celebrado por dichos representantes con la compañía "Forestal Halcón", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, se demuestra el cambio de propietarios operado en relación con dicho inmueble, justificando el interés jurídico de los oferentes en el juicio que ahora se resuelve, así como que por virtud del contrato de usufructo perciben la cantidad de cuatrocientos veinticinco pesos (antes nuevos pesos) por millar de pies por concepto de monte por los productos primarios de pino que se obtengan al realizar los trabajos de silvicultura y cien pesos (antes nuevos pesos) por millar de pies por los productos secundarios, precios que las partes acordaron revisar anualmente, toda vez que dicho contrato tiene una vigencia de quince años a partir de su firma que tuvo lugar el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y cuatro.

Con el contrato de usufructo celebrado por María del Socorro Ibarra Lizárraga, propietaria del lote 2-G, Jorge Eduardo Muñoz Franco, en representación de la sucesión intestamentaria de su padre Eduardo Muñoz Cigarroa, quién en vida fuera propietario del lote 3-G, Mario Armando Hinojos Castillo, Jaime Enrique Hinojos Castillo, en representación

## JUICIO AGRARIO No. 182/93

de María Castillo Chacón Vda. de Hinojos, Jaime Enrique, Víctor Manuel, Federico, Francisco Arturo, todos de apellidos Hinojos Castillo a nombre propio, y en su carácter todos ellos de propietarios del lote 4-G, Jaime Enrique Hinojos Castillo propietario del lote 6-G, Bartolo Bueno Robles propietario del lote 7-G, Armando Solís Mercado en representación de la sucesión intestamentaria de su padre Carlos Solís Colmeneros quien en vida fuera dueño del lote 8-G del predio rústico denominado "San Dimas, Carboneras, Puenteceillas y sus Demasías", y la compañía "Forestal Halcón", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, se acredita la relación contractual antes dicha, por virtud de la cual la empresa se obliga a pagar a los citados propietarios, la cantidad de cuatrocientos veinticinco pesos (antes nuevos pesos) por millar de pies rollo por los productos primarios de pino que se obtengan de los predios usufructuados, y que dicho contrato tiene una vigencia de quince años a partir de su firma que tuvo lugar el diez de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.

Con la copia certificada de la escritura pública volumen quinientos ochenta y seis, número quince mil seiscientos cincuenta y seis, de catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, que contiene la protocolización de la Acta de Asamblea General de Propietarios, celebrada el veinte de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, se demuestra que a partir de esta fecha pasaron a formar parte de tal sociedad María del Socorro Ibarra Lizárraga, Jorge Eduardo Muñoz Franco, María de la Concepción viuda de Hinojos, Jaime Enrique, Víctor Manuel, Federico, Francisco Arturo y Mario Armando, estos cinco de apellidos Hinojos Castillo, Roberto Pérez Gavilán Avilés, representado por sus padres los señores Guillermo Octavio Pérez Gavilán León y Lorena Avilés López de Pérez Gavilán, Bartolo Bueno Robles y Armando Solís Mercado, propietarios y causantes de los propietarios de las fracciones en que se dividió el predio "San Dimas, Carboneras, Puenteceillas y sus Demasías", dejando de percibir, en consecuencia la cantidad pactada en el contrato de usufructo referido en el párrafo anterior.

Con la copia certificada del permiso de aprovechamientos forestales para la explotación de los predios involucrados en el juicio de que se trata, expedido en favor de la empresa "Forestal Halcón", Sociedad de

Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, para el año en curso, se demuestra que existe permiso de la autoridad competente para la explotación de los predios propiedad de los oferentes.

Con la copia de la escritura pública que contiene el Acta Constitutiva de la empresa denominada "Productora de Triplay", Sociedad Anónima los oferentes demuestran que el siete de noviembre de mil novecientos sesenta y seis, Angel, Telésforo, Salvador, Alfonso, Luis, Antonio, Gabriel, Marcial, todos de apellidos Fernández de Castro Casas, Manuel Gonzalez Puente, Rafael J. Guerrero Rodriguez, y la Sociedad Mercantil "Maderas Selectas y Molduras", Sociedad Anónima, representada por su administrador general Grover C. Stewart constituyeron la sociedad mercantil que denominaron "Productora de Triplay", Sociedad Anónima, cuyo objeto es la producción, distribución, compra y venta de productos y subproductos forestales y la compra de los bienes inmuebles que sean necesarios para los objetos mencionados, según se desprende de la cláusula segunda de dicha acta.

Con la copia certificada de la Acta de Asamblea General de Accionistas únicamente se acredita el cambio de administración de la empresa citada en el punto anterior, del presidente de la Asamblea así como de los miembros del Consejo de Administración, quienes ceden el cien por ciento de su derecho corporativo en esa empresa, que en lo sucesivo se denominará "Productora de Triplay", Sociedad Anónima de Capital Variable y se hace nueva distribución del capital social, para quedar en la forma en que se especifica en dicha documental.

Con la copia certificada de la escritura pública número seiscientos ocho, pasada ante la fe del licenciado Jesús Bermudez Barba, Notario Público número ocho de Durango, Durango, se acredita que el seis de marzo de mil novecientos noventa y cinco, Mario Armando Hinojos Castillo, en ejercicio de su propio derecho y en nombre y representación de Jaime Enrique, Victor Manuel, Federico y Francisco Arturo y Mario Armando, todos de apellidos Hinojos Castillo y María Castillo Chacón viuda de Hinojos, herederos de Manuel Hinojos Rodriguez, vendieron a la empresa "Productora de Triplay", Sociedad Anónima de Capital



Variable el inmueble denominado Lote "4-G" del fraccionamiento del predio "San Dimas", Carboneras, Puenteillas y sus Demasías", ubicado en el Municipio de San Dimas Estado de Durango.

Con la copia certificada de la escritura pública número tres mil ciento diecinueve, pasada ante la fe de la licenciada Margarita Valdez Serrano, Notario Público número cinco, se acredita que el ocho de junio de mil novecientos noventa y dos, Francisco Pérez Gavilán de la Parra, apoderado de la Sociedad Mercantil denominada "Consolidate Moulding Corporation", y Gerente General de la Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable denominada "Forestal Halcón", José Luis Fernández de Castro Pages, Gerente General de la Sociedad Mercantil denominada "Industrial Pinos Altos", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y Alfonso Fernández de Castro Casas, Presidente del Consejo de Vigilancia de la Sociedad Mercantil denominada "Forestal Chapultepec" Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, constituyeron una Sociedad Anónima de Capital Variable que denominaron "Molduras Halcón", cuyo objeto es la industria, fabricación, aprovechamiento, comercialización, importación y exportación de toda clase de productos forestales, compraventa de maderas elaboradas y semi elaboradas y de otros efectos mercaderías, artículos y efectos de comercio relacionados o no con los objetos anteriores, así como la importación y exportación de los mismos, compraventa de equipos, maquinaria, instalaciones y accesorios, así como la adquisición en propiedad, arrendamiento o por cualquier otro título legítimo de los bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para el desarrollo y fines de la sociedad.

Con las copias certificadas de seis recibos de liquidación de cuotas obrero patronales de las empresas denominadas "Forestal Halcón", Sociedad de Responsabilidad Limitada, "Productora de Triplay", Sociedad de Responsabilidad Limitada y "Molduras Halcón", Sociedad Anónima de Capital Variable, correspondientes al quinto bimestre del año en curso, a los cuales se acompañan las cédulas de liquidación de las cuotas de referencia en las que aparecen los nombres de los trabajadores que laboran para dichas empresas y se especifica el número de afiliación como asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social y

## JUICIO AGRARIO No. 182/93

las percepciones de los mismos, se demuestra que las multitudes de empresas constituyen una planta productiva que transforma las maderas provenientes de los lotes propiedad de los oferentes, que son la fuente generadora de empleos distribuidos tanto en las oficinas y plantas, como en el terreno donde se genera la materia prima, con los cuales se beneficia a más de mil trescientas familias.

Del análisis de las probanzas antes descritas se tiene que, si bien, los documentos aportados son posteriores a la fecha en que se inició el procedimiento de nulidad de fraccionamientos por actor de simulación que ahora se resuelve, también lo es que con ellos se acreditan hechos que ocurrieron fuera del periodo que lo motivó, mismos que corroboran los argumentos esgrimidos en párrafos anteriores, ya que con estos elementos probatorios y las documentales ofrecidas por los propietarios por conducto de su entonces apoderado Victor Manuel Cano Cooley, quedó plenamente demostrado que en el presente caso no se dan los indicios de simulación previstos por el artículo 210, fracción III, incisos a) y b) de la Ley Federal de Reforma Agraria y si, por el contrario, se confirma la explotación directa o indirecta por parte de los propietarios de los controvertidos inmuebles, mismos que en la actualidad están explotados legalmente y al amparo del permiso forestal correspondiente, constituyendo una fuente generadora de empleos para más de tres mil trescientas familias, y que efectivamente, han sido los propietarios quienes obtienen, en lo individual, los beneficios del aprovechamiento forestal de sus inmuebles.

CUARTO. Que es de modificarse el Mandamiento Gubernamental dictado el tres de agosto de mil novecientos sesenta y seis, por lo que hace a la superficie concedida, otorgando, por concepto de ampliación de ejido, al poblado denominado "Carboneras y Anexos", Municipio de San Dimas, Estado de Durango, una superficie total de 1,096-00-00 (mil noventa y seis) hectáreas de agostadero de mala calidad y monte, del predio "Santa Ana", propiedad de la compañía "Maderera Industrial de San Dimas", Sociedad de Responsabilidad Limitada, ubicado en el Municipio de San Dimas, Estado de Durango, que resulta afectable, por exceder los límites de la pequeña propiedad.

## JUICIO AGRARIO No. 182/93

QUINTO. Que atendiendo a los anteriores razonamientos, resulta procedente conceder, por concepto de ampliación de ejido, al poblado "Carboneras y Anexos", del Municipio de San Dimas, Estado de Durango, una superficie total de 1,096-00-00 (mil noventa y seis) hectáreas de agostadero de mala calidad y monte, del predio "Santa Ana", propiedad de la compañía "Maderera Industrial de San Dimas", Sociedad de Responsabilidad Limitada, ubicado en el Municipio de San Dimas, Estado de Durango, afectable conforme a lo dispuesto por los artículos 209 relacionado con el 249 interpretado en sentido contrario, y el 250 de la Ley Federal de Reforma Agraria, la cual fue entregada en posesión precaria a los solicitantes mediante la ejecución parcial del mandamiento del Gobernador del Estado; superficie que deberá localizarse conforme al plano proyecto que obra en autos, siendo la extensión afectada únicamente la que corresponde al polígono marcado con el número II, que pasará a ser propiedad del Estado con todas sus accesiones, usos, costumbres y tradiciones para constituir los derechos de los sesenta y cinco campesinos capacitados, cuyos nombres se relacionan en el expediente, considerando segundo de esta sentencia. En cuanto a la determinación del destino de las tierras, la asamblea de los interesados, de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 96 de la Ley Agraria vigente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 189 párrafo segundo, tercero transitorio párrafo cuarto de la Ley Agraria; y 1º y 9º, fracción VIII, así como el cuarto transitorio fracción II, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se

## R E S U E L V E :

PRIMERO. Es procedente la ampliación de ejido promovida por un grupo de campesinos del poblado "Carboneras y Anexos", Municipio de San Dimas, Estado de Durango.

SEGUNDO. No ha lugar a declarar nulo el fraccionamiento del predio "San Dimas, Carboneras, Puertecillas y sus Demasías", constituido por los inmuebles denominados "El Embudo o Lote 2-G", "Piedra Bola o Lote 3-G,

## JUICIO AGRARIO No. 182/93

"La Centella o Lote 4-G", "Los Mimbres o Lote 5-G", "San Miguel o Lote 6-G", "Sauces o Lote 7-G" y "La Majada o Lote 8-G", propiedad actual, respectivamente, de María del Socorro Ibarra Lizárraga, de la sucesión intestamentaria de Eduardo Muñoz Cigarroa, de la compañía "Productora de Triplay", Sociedad Anónima de Capital Variable, de Roberto Pérez Gavilán Avilés, de Jaime Enrique Hinojos Castillo, de Bartolo Bueno Robles y de la sucesión intestamentaria de Carlos Solís Colmeneros, toda vez que no se configura la hipótesis normativa de simulación a que se refiere el artículo 210, fracción III de la Ley Federal de Reforma Agraria.

TERCERO. Es de dotarse y se dota, por concepto de ampliación de ejido, al poblado "Carboneras y Anexos", del Municipio de San Dimas, Estado de Durango, una superficie total de 1,096-00-00 (mil, noventa y seis) hectáreas de agostadero en terrenos sitos del predio "Santa Ana", propiedad de la compañía "Industria Industrial de San Dimas", Sociedad de Responsabilidad Limitada, ubicado en el Municipio de San Dimas, Estado de Durango, afectado en la presente acción por exceder los límites de una pequeña propiedad, con fundamento en lo establecido en los artículos 209, relacionado con 249 interpretados en sentido contrario y el 250 de la Ley Federal de Reforma Agraria. Dicha superficie deberá ser localizada conforme al plano proyecto que obra en autos, acotada en el tomo II del número II, que pasará a ser propiedad del ejido con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres, para constituir los derechos de los sesenta y un campesinos capacitados, cuyos nombres se relacionan en el considerando segundo de esta sentencia. En cuanto a la determinación del destino de las tierras, la asamblea resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria vigente.

CUARTO. Se modifica el Mandamiento del Gobernador del Estado de Durango dictado el tres de agosto de mil novecientos sesenta y seis, en cuanto a la superficie concedida y causal de afectación.

QUINTO. Esta sentencia deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango y los puntos resolutivos de

## JUICIO AGRARIO No. 182/93

la misma en el Boletín Judicial Agrario; inscribese en el Registro Público de la Propiedad correspondiente y procédase a hacer las cancelaciones respectivas, asimismo, inscribase en el Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir los certificados de derechos correspondientes conforme a lo resuelto en esta sentencia )

SEXTO. Notifíquese a los interesados y comuníquese por oficio al Gobernador del Estado de Durango, al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en esta Capital con copia del presente fallo; y a la Procuraduría Agraria; ejecútese y, en su oportunidad, archívese el tomo como asunto concluido.

Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario. Los Magistrados que lo integran, con el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

LIC. LUIS O. PORTE PETTI MORANO

SECRETARIA DE ACUERDOS  
C/O. 7. DURANGO, DGO

MAGISTRADOS

DR. GONZALO M. ARMIENTA  
CALDERON

LIC. JORGE LANZ GARCIA

LIC. RODOLFO VELOZ BAÑUELOS

LIC. LUIS ANGEL LÓPEZ  
ESCUTIA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

LIC. MARCO VINICIO MARTINEZ GUERRERO

EL C. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, QUE SUSCRIBE C E R T I F I C A : QUE LAS COPIAS QUE ANTECEDEN, SON FIEL REPRODUCCION DE SUS ORIGINALES, QUE OBRAN EN LOS AUTOS DEL JUICIO AGRARIO NUMERO 182/93, RELATIVO A LA ACCION AMPLIACION DE EJIDO, DEL POBLADO "CARBONERAS Y ANEXOS", MUNICIPIO SAN DIMAS, ESTADO DE DURANGO, DE LA SENTENCIA EMITIDA EL NUEVE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, QUE SE EXPIDEN EN CINCUENTA Y NUEVE FOJAS UTILES, SELLADAS Y COTEJADAS, PARA SER ENVIADAS AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 07, CON SEDE EN DURANGO, DURANGO.- DOY FE.

MEXICO, D.F., A DOCE DE ABRIL DE DOS MIL CINCO.

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

LIC. HUMBERTO JESUS QUINTANA MIRANDA



SECRETARIA GENERAL  
DE ACUERDOS

COTEJO DATOS: JFTR

DURANGO, DURANGO, A SEIS DE MAYO DE DOS MIL CINCO, EL LICENCIADO ARTURO LOPEZ MONTOYA, SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO SIETE, CERTIFICA QUE LA PRESENTE COPIA FUE SACADA DE LA COPIA AUTORIZADA POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, QUE TENGO A LA VISTA Y QUE CONSTA DE CINCUENTA Y NUEVE FOJAS UTILES, CONSTE.-----



SECRETARIA DE ACUERDOS  
DISTRITO 07, DURANGO, DGO.

Handwritten signature or mark.

## ACTA DE EXAMEN PROFESIONAL

NÚMERO **L25-018**

En la BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO,  
CLAVE **10BEP0003D**, ubicada en Calzada Escuela Normal s/n,  
a las **8:00** Hrs. del día **27** de **junio** de 1998, se reunieron los  
C.C. Profesores:

Presidente: **MARIA DEL CARMEN SOTO**

Secretario: **ANA MARIA RODANTE BARBOZA**

Vocal: **JOSEFINA OBECILLA CARRASCO HERRERA**

Integrantes del Jurado designado por la Dirección del Plantel para aplicar el  
examen recepcional al (a) C.

**THELMA CRISTINA DEVORA HERRERA**

Número de Matrícula: **W10-0016** quien se examinó con base  
en el documento recepcional denominado:

**EL ROL DOCENTE EN LA FORMACION DE VALORES MORALES EN LA ESCUELA PRIMARIA.**

Para obtener el Título de:

*Licenciado(a) en Educación Primaria*

En virtud de haber terminado sus Estudios Profesionales en la propia institución y  
haber cumplido con el Servicio Social Educativo reglamentario, lo que se  
comprobó con la constancia correspondiente.

Se procedió a efectuar el Examen de acuerdo con las normas dispuestas por la Dirección  
General de Educación Normal y el resultado fue:

**APROBADA POR UNANIMIDAD CON MENCIÓN HONORÍFICA.**

En continuación se tomó la protesta de ley en los términos siguientes:

¿Protesta Usted ejercer la carrera de:

Licenciado (a) en Educación Primaria

con entusiasmo y honradez, velar siempre por el prestigio y buen nombre de esta Escuela que le otorga su Título y continuar esforzándose por mejorar su preparación en todos los órdenes para garantizar los intereses de la juventud y de la Patria?

Si protesto

No protesto

si así lo hiciere Usted, que sus alumnos, sus compañeros y la Nación se lo premien y si no, se lo demanden.

Se levanta la presente firmando de conformidad los que intervinieron en el acto.

*[Firma]*

Firma del Sustentante

Integrantes del Jurado

Presidente

*[Firma]*  
PROFRA. MARIA DEL CARMEN SOTO

Secretario

*[Firma]*  
PROFRA. ANA MARIA RODARTE BARBOZA

Vocal

*[Firma]*  
PROFRA. JOSEFINA CEBULIA CARRASCO HERRERA

La Directora

*[Firma]*  
Profra. Irma Leticia Magallanes Castañeda

La Subdirectora-Secretaria

*[Firma]*  
Profra. Marta de Lourdes Pescador Salas